

En la ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León, a los 20-veinte días del mes de noviembre de 2012-dos mil doce.

**Visto** para resolver el expediente número **CEDH/314/2012**, relativo a las queja presentada por la **Sra. \*\*\*\*\***, respecto de actos que estimaron violatorios a sus derechos humanos, cometidos presuntamente por **elementos de la Policía Ministerial de la Agencia Estatal de Investigaciones**; y considerando los siguientes:

## I. HECHOS

1. Queja de la **Sra. \*\*\*\*\***, de fecha 01-primero de agosto de 2012-dos mil doce, levantada por personal de éste organismo y en la que se manifiesta esencialmente lo siguiente:

*(...) El día jueves 26-veintiséis de julio del año en curso, siendo las 09:00-nueve horas, al encontrarse en su lugar de trabajo (\*\*\*\*\*), ubicado en la calle \*\*\*\*\* del Centro Comercial \*\*\*\*\* en San Pedro Garza García, Nuevo León, fue afectada en sus derechos humanos al ser detenida sin motivo alguno y maltratada físicamente por parte de agentes de la policía ministerial de la Agencia Estatal de Investigaciones; los cuales eran 4-cuatro, de los que reconoce físicamente a tres de ellos de los que la detuvieron, uno de tez aperlada, 1.70 mts-un metro con setenta centímetros., de altura, complexión delgado, sin barba ni bigote, pelo color negro, peinado normal, de 27-veintisiete a 28-veintiocho años de edad aproximadamente; otro, de tez moreno, de 1.70 mts-un metro con setenta centímetros., de altura, complexión media, pelo color negro, peinado entre rapado y cuadrado, sin barba, ni bigote, de 32-treinta y dos a 33-treinta y tres años de edad, aproximadamente; de los que la maltrataron, de tez blanca, de 1.65 mts.-un metro con sesenta y cinco centímetros, de altura, complexión robusto, pelo rapado y negro, con barba de candado y 'cacarizo' de la cara, de 42-cuarenta y dos a 43-cuarenta y tres años de edad aproximadamente. Que el día antes descrito aproximadamente a las 08:00-ocho horas, recibió una llamada telefónica de la Dra. \*\*\*\*\* de la que no sabe sus apellidos y quien es la subdirectora del negocio, dicha persona le dijo: 'doña \*\*\*\*\*', dijo el Dr. que por favor fuera abrir la clínica, porque no hay quien vaya a abrirla'; agrega que se refiere al Dr. \*\*\*\*\*; le contestó: 'sí Dra.', respondiéndole la Dra: 'cuánto tiempo hace del lugar en donde se encuentra', ella le contestó: 'permítame deje le pregunto a mi esposo';*

en eso le estaba preguntando a su esposo, y la Dra. le dice: 'dice el Dr. que se venga en eco y aquí lo pagamos'. Debido a lo anterior se dirigió a ese lugar; al llegar al negocio aproximadamente a las 09:00-nueve horas, observó que éste estaba abierto, entró al mismo y se encontraba una Dra., especialista en periodoncia, de la que no sabe el nombre, quien estaba sentada detrás del recibidor, también se encontraba el Sr. \*\*\*\*\*, del que no recuerda su apellido, quien es el que se encarga de recoger el corte de la semana; se dirigió a la Dra., especialista y le preguntó por la Dra. \*\*\*\*\*, respondiéndole que andaba arriba; en ese momento ingresaron 2-dos personas del sexo masculino, los que describe anteriormente, uno de ellos, siendo el de complexión media, le dijo: 'la Sra. \*\*\*\*\*', ella le respondió: 'sí, soy yo', contestándole: 'somos de la ministerial' y la cuestionó: 'algún documento que haya perdido o una tarjeta que le hayan clonado', ella le contestó: 'sí, me clonaron la tarjeta', y el ministerial le dice: 'acompañenos, vamos a la ministerial, porque ya tenemos a la persona para que la identifique y haga la denuncia', a lo que le respondió: 'sí, está bien', por lo que los acompañó, subiéndose a la parte trasera de un vehículo tipo stratus, color vino oscuro, con los vidrios ahumados, sin esposarla; junto a ella, se subió el ministerial, que describe como delgado, mientras que el otro, de complexión media, manejó la unidad; agrega que antes de salir de la plaza comercial, el ministerial de complexión media, le dijo: 'mire, las cosas están así, el Dr. \*\*\*\*\* está en la mejor disposición para ponerse de acuerdo para que le pague el dinero que le robó', ella le contestó: 'de qué me está hablando, yo no le he robado nada al doctor, dígame de cuánto me está acusando', sin que le contestara nada. Señala que en el trayecto a la Agencia Estatal de Investigaciones el ministerial citado le dijo: 'dígame la verdad, porque llegando allá se la van a putear'. Que alrededor de media hora llegaron a la Agencia Estatal de Investigaciones, pasando a los patios del estacionamiento, la bajaron de la unidad y la llevaron a unas oficinas del segundo piso; al entrar a la oficina, había varios ministeriales hombres y dos mujeres de los que no sabe con exactitud cuántos eran, ni sus características físicas, algunos de esos ministeriales les señalaron a sus compañeros: 'esta es la pinche vieja que robó', y los ministeriales que la llevaban respondieron que sí; que la sentaron en una silla, frente a un escritorio, y se acercó un ministerial que describe como de tez blanca y robusto, frente a su cara le dijo: 'a ver hija de la chingada, dónde está el dinero que se robó', ella le respondió 'señor, yo no me he robado nada', y en ese momento ese ministerial, le dio una cachetada en la mejilla izquierda, volviéndole a preguntar lo mismo, ella le respondió: 'señor, le juro que yo no he robado nada', y este ministerial le dio otra cachetada en la mejilla derecha, a la vez que le dijo 'a mí no me jure nada', 'es más espósenla y tráeme una bolsa', por lo que otro ministerial del que no recuerda sus características físicas, la esposó de las muñecas de sus manos, haciéndoselas hacía atrás de la espalda, y en ese momento, el mismo ministerial de tez blanca, le pone la bolsa de plástico en su cabeza, cubriéndole el rostro, a la vez que alguien le apretaba la misma, y le preguntan con palabras malsonantes: 'dónde está el dinero que te

robaste', que como no podía respirar, rompió la bolsa con los dientes, y en ese momento el ministerial le dijo: 'pinche vieja, no la rompas', dándole en ese momento una cachetada en la mejilla izquierda, y da la orden para que trajeran otra bolsa y se la pusieran doble, por lo que le pusieron la doble bolsa, apretándole la misma para asfixiarla, a la vez que volvían a preguntarle que les dijera dónde estaba el dinero que según se había robado; ella, pudo contestarle: 'yo no me robé nada, así me pueda matar, yo no me robé nada'; agrega que en ese momento le dieron varios golpes en la cabeza, con el puño cerrado, sin saber precisar cuántos golpes recibió pero fueron varios; que debido a que ya no podía respirar le quitaron las bolsas; agrega que ese maltrato duró alrededor de 20-veinte minutos; el ministerial de tez blanca, le dijo: 'siéntese allá, en aquella silla, viendo a la pared y no volteé, porque le va a ir mal', por lo que así lo hizo, transcurriendo alrededor de 40-cuarenta minutos, y timbró su teléfono celular, pero su bolsa estaba en uno de los escritorios de los ministeriales; el ministerial que describe como delgado le dijo 'señora, ya le mandó un mensaje su hija, donde dice que ya la pasaron y le pusieron suero'; en ese momento se acercó el ministerial descrito de complexión media, y la levantó de la silla, la llevó a los sanitarios de los hombres, y la puso frente al lavamanos, y le dijo: 'señora, le estoy dando una oportunidad, que me diga, dónde está el dinero que se robó', ella le contestó: 'señor, yo no me he robado nada', en ese momento entró el ministerial de tez blanca, que la agredió, a hacer sus necesidades sin importar que estuviera presente, y preguntó al otro ministerial: 'ya cantó, esta hija de su ...', respondiéndole el otro ministerial: 'todavía no'; la sacó de ese lugar, empiezan a caminar y ese ministerial le dijo: 'yo le di la oportunidad y usted no quiere decir, de aquí la van a arraigar, luego de ahí la van a mandar al penal', indicándole que se sentara en unas sillas que estaban en el pasillo, pasando el ministerial a la oficina donde la habían maltratado, transcurrieron alrededor de 5-cinco minutos y salió el ministerial descrito como delgado, con unas hojas en mano, y le dijo: 'levántese' y la esposa de las muñecas de sus manos, y la vez que le indicó: 'acompañeme', la llevó a la planta baja y la pasaron a un lugar, donde le tomaron sus huellas dactilares y la toma de fotografías; después la llevaron al mismo lugar, permaneciendo menos de 5-cinco minutos y después los dos ministeriales que la detuvieron la llevaron al estacionamiento y subieron a la unidad, llevándola al Hospital \*\*\*\*\*, específicamente al área del \*\*\*\*\*, en donde le realizaron un dictamen médico, y después la llevaron a la Agencia del Ministerio Público No. Dos de Robos, ubicada en Ruiz Cortines, en ese lugar los ministeriales se dirigieron con una persona de sexo masculino de la que recuerda era de tez blanca, 'chaparrito', complexión 'rellenito', pelo negro, sin pelo en el área del centro de la cabeza, de 30-treinta años de edad aproximadamente; a éste le entregaron las hojas, y al paso de 20-veinte minutos, esa persona le habló y la sentó en una silla, frente a un escritorio, diciéndole: 'señora qué pasó', ella le respondió: 'señor no sé, mi patrón me está acusando de robo', esa persona le pregunta: 'de cuánto la están acusando', respondiéndole: 'desconozco, no sé, y le dice: señor,

tengo mucho miedo, porque yo entro a esa casa a hacerle la limpieza y mis huellas van a estar por donde quiera', y este joven le contestó: 'tranquílcese no pasa nada, ahorita le voy a decir la cantidad de que la acusa', y le dijo: 'la está acusando que le robó \$350,000.00 (trescientos cincuenta mil pesos), más dólares', por lo que esta persona le dio indicaciones a otro joven, para que escribiera en la computadora, y después, la persona descrita, le dijo: 'ahorita me va a firmar esto', a lo que le respondió: 'señor, yo no quiero firmar nada', y esa persona le comentó: 'no se preocupe, confié en mí, no la voy a hacer firmar algo que no es; lo que va a firmar es la notificación de la acusación', prestándole las hojas que iba a firmar y recuerda que era la acusación de su patrón Dr. \*\*\*\*\* , quien decía que sospechaba de su empleada doméstica, refiriéndose a ella, como quien había robado la cantidad de trescientos cincuenta mil pesos y dólares, sin recordar cuántos; por lo que firmó esas hojas. Después esa persona le dijo, 'ahorita la van a llevar al reclusorio, ya no va a firmar nada'; agrega que no había ningún defensor de oficio o abogado de su confianza, pero nunca le tomaron declaración. Por lo que los mismos ministeriales la trasladaron al reclusorio de las celdas de la \*\*\*\*\* (reclusorio municipal de Monterrey); en ese lugar le facilitaron el teléfono y se logró contactar con sus familiares, permaneció en ese lugar todo el día del jueves y viernes, hasta las 00:00-cero horas, salió del reclusorio; sabe por su esposo que no pagó ninguna fianza, siendo lo que aconteció. Por otra parte, desea señalar que no es su deseo plantear queja alguna en contra del personal de la Agencia del Ministerio Público, ni del Defensor de Oficio, sólo en contra de los agentes ministeriales por los actos descritos (...)

2. En atención a la anterior queja, la **Segunda Visitaduría General** de este organismo, dentro del presente expediente, admitió la instancia y calificó los hechos como presuntas violaciones a la **Sra. \*\*\*\*\***, atribuibles presuntamente a **elementos de la Policía Ministerial de la Agencia Estatal de Investigaciones** y consistentes en: **violaciones al derecho a la libertad personal, integridad personal y seguridad jurídica.**

Se notificó la instancia a las partes, se solicitó informes documentados y se inició la investigación respectiva para obtener las siguientes:

## II. EVIDENCIAS

Además de las comparecencias referidas en el título de HECHOS, en el expediente se encuentra lo siguiente:

1. Dictamen médico, practicado por el **Perito médico profesional de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos** a la **Sra. \*\*\*\*\***, en fecha 01-primero de agosto del año 2012-dos mil doce.

2. Oficio número \*\*\*\*\*, recibido por este organismo en fecha 01-primeros de octubre del año 2012-dos mil doce, signado por el **Agente del Ministerio Público Investigador Número Dos en Delitos Patrimoniales Especializado en Robos en General**, en el que anexa copia certificada de la averiguación previa \*\*\*\*\*. Este organismo destaca los siguientes autos como evidencias:

a) Parte informativo ministerial que firmó el **Responsable del Tercer Grupo de Delitos Patrimoniales de la Agencia Estatal de Investigaciones** y recibió el **Agente del Ministerio Público Investigador Especializado en Robos en General Número Dos** el 26-veintiséis de julio de 2012-dos mil doce, mismo que a continuación se transcribe:

*"[...] Por medio del presente, me permito Presentar ante esa H. Fiscalía a su digno cargo a la persona anotada al margen superior derecho, quien nos proporcionó como datos generales, llamarse como se menciona de 49 años de edad, Originario de Monterrey, N.L., Estado Civil Casado, Grado máximo de Estudios carrera técnica, de Ocupación Asistente Dental, con domicilio en calle \*\*\*\*\*, Colonia \*\*\*\*\*, en el municipio de Guadalupe N.L.; lo anterior en relación a los hechos denunciados por el C. \*\*\*\*\* en fecha 24 de Julio del presente año.*

*Informando a Usted, que acudiera la unidad 306 tripulada por los elementos activos \*\*\*\*\*Y \*\*\*\*\*, mismos que se entrevistaron con el C \*\*\*\*\*no sin antes identificarse como elementos activos de esta Corporación, manifestando haber sufrido un robo por la cantidad de \$350.00 (trescientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N. en efectivo, misma cantidad que tenía en un buró en su recámara; así mismo del otro buró la cantidad de 400.00 ( cuatrocientos US Dólares) refiriéndoles a los agentes que solo tres personas tiene la llave de acceso a su domicilio tanto el como dos personas más es decir su asistente personal de nombre \*\*\*\*\*así como su trabajadora domestica de nombre \*\*\*\*\*, agregando el C. \*\*\*\*\*tener la sospecha fundada en la C. \*\*\*\*\* ya que pasa largos periodos de tiempo a solas en su domicilio ubicado en \*\*\*\*\* de la Colonia Miravalle en esta Ciudad, refiriendo a su vez que dicha persona tiene su domicilio laboral en la CLINICA denominada LA \*\*\*\*\* sucursal \*\*\*\*\* ubicada en el Centro comercial \*\*\*\*\*en la Av. \*\*\*\*\*en el municipio de San Pedro Garza García, N. L. Así mismo refiere que ya había hablado directamente con su Asistente Personal de nombre \*\*\*\*\*mismo que le refiriera que desconoce quien haya sido el responsable del robo y a su vez negando ser el responsable del mismo.*

*Haciendo del conocimiento de Usted, que la unidad designada al dar seguimiento a dicha denuncia, se trasladaron el día de hoy al domicilio labora de la C. \*\*\*\*\* , es decir en la Clínica denominada \*\*\*\*\* ubicada en la \*\*\*\*\*en la Plaza Comercial \*\*\*\*\* , lugar donde siendo aproximadamente las 9:00hrs. logrando ubicar a la ahora puesta a su disposición con la cual se entrevistaron previa identificación como*

elementos Activos de esta Corporación, a la que se le explico el motivo de nuestra presencia y al cuestionarla en relación a los hechos que se investigan esta manifestara que efectivamente tiene 8 años trabajando para el Dr. \*\*\*\*\* como asistente dental en la Clínica antes mencionada, teniendo como funciones las siguientes: asistencia a los doctores, elaboración de lista de material, estar al pendiente de que no falte nada, limpieza general etc., teniendo un horario de 09:00 hrs. a 18:00 hrs. de lunes a viernes y el sábado de 09:00 hrs. a las 14:00 hrs., así mismo refiere que la directora de la Clínica para la cual labora la Dr. \*\*\*\*\* asignó las llaves de dicha Clínica para que la abriera por las mañanas, así mismo refiere la haor apuesta a su disposición que desde hace aproximadamente un año dos meses el Dr. \*\*\*\*\* le asigno las llaves de su domicilio particular para le hiciera labores de limpieza, teniendo libre acceso a todo el domicilio en general, mencionando que después de terminar dichas labores regresaba a la Clínica a continuar con sus labores de asistente dental hasta cumplir con su turno establecido, por lo que la administradora de nombre \*\*\*\*\* pedía autorización al Corporativo para darle dinero la cantidad de (100.00 cien pesos 00/100 M.N) para su traslado en taxi. Reiterando la C. \*\*\*\*\* que efectivamente pasa mucho tiempo en el domicilio del afectado a razón de su trabajo, agregando estar en la mejor Disposición de acompañar en forma voluntaria a los Investigadores ante la Autoridad para aclarar la situación ya que no se considera responsable.

Se hace de su conocimiento que se verifico en el Departamento de Identificación si la C. \*\*\*\*\* tenia antecedentes obteniendo como resultado que Si cuenta con antecedentes según el expediente \*\*\*\*\* por el delito de robo.

Se adjunta la presente, copia de la Denuncia, Dictamen medico correspondiente y se remiten como pertenencias: una bolsa en color negro conteniendo en su interior una bolsa en color negro con blanco conteniendo en su interior maquillaje de diverso, unos lentes sin marca visible, una cartera en color morado sin marca visible conteniendo en su interior diversas tarjetas e identificaciones a nombre \*\*\*\*\* , una tarjeta del IMSS a nombre de \*\*\*\*\* así como la cantidad de 889.00 pesos m.n, un juego de ocho llaves con un llavero de mariposa , un teléfono celular de la marca LG color negro con gris con numero de IMEI 357246-03-005637-6 un chip TELCEL con funda en color negro, un recipiente de vidrio en color morado y otro recipiente de plástico en color rosa.

Agentes a cargo \*\*\*\*\*y \*\*\*\*\*al mando del suscrito. [...]" (sic)

**b) Examen Médico de la Dirección de Criminalística y Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado** con folio \*\*\*\*\* y practicado a la **Sra. \*\*\*\*\*** a las 13:40 horas del 26-veintiséis de julio de 2012-dos mil doce.

c) Comparecencia del Sr. \*\*\*\*\*, ante el **Delegado del Ministerio Público Adscrito al Cuarto Distrito Judicial con Residencia en San Pedro Garza García, Nuevo León**, el 24-veinticuatro de julio de 2012-dos mil doce, en la cual denuncia el robo de un dinero en efectivo.

d) Comparecencia de la Sra. \*\*\*\*\*, ante el **Agente del Ministerio Público Investigador Número Dos en Delitos Patrimoniales Especializado en Robos en General**, el 26-veintiséis de julio de 2012-dos mil doce, en la cual rinde declaración informativa y se da fe de que presentaba lesiones visibles.

e) Comparecencia del Sr. \*\*\*\*\*, ante el **Agente del Ministerio Público Investigador Número Dos en Delitos Patrimoniales Especializado en Robos en General**, el 26-veintiséis de julio de 2012-dos mil doce, en la cual rinde declaración testimonial.

f) Comparecencia del \*\*\*\*\*, ante el **Agente del Ministerio Público Investigador Número Dos en Delitos Patrimoniales Especializado en Robos en General**, el 26-veintiséis de julio de 2012-dos mil doce, en la cual rinde declaración testimonial.

### III. SITUACIÓN JURÍDICA

1. La situación jurídica generada por la violación de derechos humanos y del contexto en el que los hechos se presentaron, y que es valorada en el cuerpo de esta resolución, de acuerdo a la versión del afectado, en esencia es la siguiente:

La Sra. \*\*\*\*\* refirió que a las 09:00 horas del 26-veintiséis de julio de 2012-dos mil doce policías ministeriales llegaron a su lugar de trabajo y, a base de engaños, fue detenida y agredida por los agentes ministeriales para obtener de ella información sobre un robo de dinero en efectivo.

2. La **Comisión Estatal de Derechos Humanos**, con base en lo dispuesto por los **artículos 102 apartado "B" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 87 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 3 de la Ley que crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos y 13 de su Reglamento Interno**, tiene competencia en el Estado para conocer de quejas relacionadas con presuntas violaciones a los derechos humanos, cuando éstas fueren imputadas a autoridades o servidores públicos de carácter estatal, como lo es en el presente caso, **elementos de la Policía Ministerial de la Agencia Estatal de Investigaciones**.

### IV. OBSERVACIONES

**Primera.** Del estudio y análisis pormenorizado de los hechos y evidencias que integra el expediente **CEDH/314/2012**, de conformidad con el **artículo 41 de la Ley que crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos**, al ser valorados en su conjunto, de acuerdo con los principios de la lógica y de la experiencia, se concluye que en la especie se acredita que los **elementos la Policía Ministerial de la Agencia Estatal de Investigaciones**, violaron los derechos a la **libertad y seguridad personales por detención ilícita y arbitraria, integridad personal por tratos crueles, inhumanos y degradantes y seguridad jurídica** de la Sra. \*\*\*\*\*.

**Segunda.** La ley que rige el funcionamiento de este organismo señala que las pruebas obtenidas oficiosamente durante el procedimiento de investigación serán valoradas en su conjunto, de acuerdo con los principios de la lógica, la sana crítica y de la experiencia, a fin de que puedan producir convicción sobre los hechos denunciados o reclamados.<sup>1</sup>

La **Corte Interamericana de Derechos Humanos** ha establecido que en el estudio de violaciones a los derechos fundamentales, la valoración de las pruebas de los hechos es más flexible, pues basta que se realice de acuerdo con las reglas de la lógica y con base en la experiencia<sup>2</sup>. Esta comisión asume este criterio, por su naturaleza como institución estatal autónoma defensora de los derechos humanos y por la naturaleza expedita del procedimiento de investigación oficiosa que integra con motivo de las violaciones a los derechos fundamentales cometidas por los agentes del Estado, lo cual es acorde con los **Principios Relativos al Estatuto y Funcionamiento de las Instituciones Nacionales de Protección y Promoción de los Derechos Humanos o Principios de París**<sup>3</sup>, y por disposición expresa de la **Ley que crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos**.

---

<sup>1</sup> Artículo 41 de la Ley que crea la Comisión Estatal de derechos Humanos de Nuevo León.

<sup>2</sup> Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Castillo Páez Vs. Perú. Sentencia. Noviembre 3 de 1997, párrafo 39.

*"39. La Corte reitera que los criterios de valoración de la prueba ante un tribunal de derechos humanos revisten características especiales, pues la determinación de la responsabilidad internacional de un Estado por violación de derechos de la persona humana, permite al Tribunal una mayor amplitud en la valoración de la prueba testimonial rendida ante él sobre los hechos pertinentes, de acuerdo con las reglas de la lógica y con base en la experiencia".*

<sup>3</sup> Del 7-siete al 9-nueve de octubre de 1991, se celebró en París el primer taller internacional de las Naciones Unidas sobre las instituciones nacionales de derechos humanos. En el taller, las instituciones elaboraron y aprobaron normas mínimas internacionales para aumentar la eficacia de las instituciones nacionales de derechos humanos; los lineamientos aprobados son conocidos como los *Principios de París*. Estos principios fueron adoptados por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en 1992, mediante la Resolución 1992/54, y reafirmados al siguiente año por la Asamblea General, mediante la Resolución 48/134. Los *Principios de*

En el caso concreto el **Procurador General de Justicia del Estado de Nuevo León** fue requerido el 31-treinta y uno de agosto de 2012-dos mil doce según consta en el sello de recibido, para que rindiera informe documentado sobre los hechos contenidos en la queja de la víctima y lo específicamente solicitado por este organismo, otorgándosele, conforme al artículo 34 de la ley que rige a esta comisión, 15-quince días naturales para cumplir con lo solicitado. A pesar de lo requerido, la autoridad nunca rindió informe ni contestación sobre los hechos notificados.

Lo anterior trae como consecuencia que **los hechos denunciados por la víctima se den por ciertos**, salvo prueba en contrario, de conformidad con el numeral **38 de la Ley que crea este organismo**. Dicho artículo dispone:

*“En el informe que rindan las autoridades o servidores públicos sobre los actos presuntamente violatorios de Derechos Humanos, deberán constar los antecedentes que obren en su poder, así como los razonamientos de las acciones, omisiones y resoluciones impugnadas por el quejoso o denunciante, a fin de que la Comisión se encuentre en aptitud de tomar las determinaciones que estime necesarias y congruentes.*

*“La falta de rendición del informe o de las documentación que lo apoye, así como el retraso injustificado en su presentación, además de la responsabilidad respectiva, tendrá el efecto de que se den por ciertos los hechos denunciados salvo prueba en contrario”*

El principio de presunción de veracidad del dicho de la probable víctima es uno de los presupuestos que rigen el procedimiento ante los organismos públicos autónomos defensores de los derechos humanos. Es por ello, que corresponde a la autoridad desvirtuar dicha presunción de veracidad con la presentación puntual de sus informes, acompañados de las constancias que acrediten objetivamente lo que expongan sobre la conducta que se les imputa como violatoria de los derechos humanos.

Por la razón anterior, el artículo 38 de la ley no sólo impone una sanción a la autoridad cuando no rinde su informe, lo presente de manera extemporánea o no acompañe las constancias que lo sustente, sino que, fundamentalmente, refleja la esencia garantista que el ombudsman como órgano de buena fe tiene frente a las presuntas víctimas, en el sentido de

---

*París se relacionan con el estatus y funcionamiento de las instituciones nacionales de derechos humanos (como las comisiones de derechos humanos y las defensorías del pueblo); entre otras cosas, las comisiones de derechos humanos deben ser capaces de supervisar cualquier situación de violación de los derechos humanos y son competentes para pronunciarse sobre las citadas violaciones mediante procedimiento expeditos cuasijurisdiccionales, cuando la ley así lo permite.*

considerar que los agraviados dicen la verdad hasta que esté objetivamente acreditado lo contrario.

Esto no significa que los organismos públicos autónomos deban motivar sus recomendaciones únicamente en el dicho considerado cierto de la presunta víctima, pues como en todo procedimiento en el que se busque la verdad procesal, deberá haber un número razonable de confirmaciones sobre los hechos que son motivo de una queja. Sin embargo, en un contexto jurídico y procesal en el que el dicho de la presunta víctima se considere cierto con fundamento en el artículo 38 de la ley, el testimonio de la parte agraviada adquiere una importante relevancia para efectos del análisis del asunto, con base en la sana crítica, la lógica y la experiencia.

Asimismo, el artículo 38 de la ley, evidencia otro principio procesal ampliamente aplicado por los órganos y tribunales internacionales dedicados a la protección de los derechos fundamentales: la defensa de las autoridades acusadas de violar los derechos humanos, no puede estar basada en la imposibilidad de las presuntas víctimas de aportar pruebas que sustenten sus denuncias, cuando con motivo de los hechos, sean las propias autoridades las que tienen el control de los medios probatorios para aclarar lo expuesto por los agraviados. Así lo ha dicho la **Corte Interamericana de Derechos Humanos**:

*"59. [...]en ciertos casos el Estado es el que tiene el control de los medios para aclarar hechos ocurridos dentro de su territorio y por ello, su defensa no puede descansar sobre la imposibilidad del demandante de allegar pruebas que, en muchos casos, no pueden obtenerse sin la cooperación del Estado. [...]En tal sentido, [...] la negativa del Estado de remitir ciertos documentos no puede redundar en perjuicio de las víctimas, sino sólo en su propio perjuicio. [...]"<sup>4</sup>.*

Igualmente, este organismo público autónomo tampoco está obligado a requerir más de una vez a las autoridades para que rindan sus informes y exhiban sus constancias en tiempo o para que alguno de sus visitadores generales acudan a las oficinas de las autoridades para realizar la investigación respectiva, pues la reglas establecidas en los **artículos 72<sup>5</sup> y 73<sup>6</sup>**

---

<sup>4</sup> Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso González y otras ("Campo Algodonero") vs. México. Resolución de solicitud de ampliación de presuntas víctimas y negativa de remisión de prueba documental. Enero 19 de 2009, párrafo 59.

<sup>5</sup> Reglamento Interno de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, artículo 72°.

*"Artículo 72°.- Se podrá requerir hasta por dos ocasiones a la autoridad para que rinda el informe o envíe la documentación solicitada.*

del **Reglamento Interno de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León**, no están dispuestas para el beneficio de las autoridades presuntamente responsables de violar los derechos humanos de los supuestos agraviados, otorgándoles varias oportunidades posteriores al primer requerimiento para que exhiban sus informes y las constancias respectivas, sino que dichas reglas existen para **facilitar la labor de investigación de este organismo, lo que fortalece su rol de garante de los derechos humanos de las presuntas víctimas.**

Por tanto, si este organismo público autónomo se allega de pruebas oficiosamente y de manera alternativa a las que las autoridades aportan con sus informes y con las constancias que acompañan, y por mayoría de razón cuando no aportan dichos documentos, puede motivar sus recomendaciones en dichos elementos de corroboración de los testimonios de las presuntas víctimas.

En términos del artículo 39<sup>7</sup> de la ley que rige a este organismo y del artículo 71<sup>8</sup> de su reglamento interno, la facultades de investigación de la Comisión

---

*De no recibir respuesta, el Visitador General acudirá a la oficina de la autoridad para hacer la investigación respectiva, en los términos del artículo anterior.*

*Si del resultado de la investigación se acredita la violación a derechos humanos, la consecuencia será una Recomendación en la que se precise la falta de rendición del informe a cargo de la autoridad. En estos casos no habrá posibilidad de amigable composición. El envío de la Recomendación no impedirá que la Comisión pueda solicitar la aplicación de las responsabilidades administrativas correspondientes en contra del funcionario respectivo.*

*Si al concluir la investigación no se acredita la violación a derechos humanos, se hará del conocimiento del quejoso, y, en su caso se orientará. En esta específica situación no habrá lugar a elaborar Acuerdo de No Responsabilidad a la autoridad."*

<sup>6</sup> Reglamento Interno de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, artículo 73°.

*"Artículo 73°.- Cuando una autoridad o servidor público sean omisos en dar respuesta a los requerimientos de la Comisión en más de dos ocasiones diferentes, lo Comisión recomendará al superior jerárquico del funcionario moroso que le imponga una amonestación pública con copia para su expediente."*

<sup>7</sup> Ley que crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos, artículo 39.

*"Artículo 39.- Cuando el asunto no se resuelva por vía conciliatoria, el correspondiente Visitador iniciará las investigaciones del caso, para cuya realización tendrá las siguientes facultades: I.- Pedir a las autoridades o servidores públicos a los que se imputen las violaciones de derechos humanos, la rendición de informes o documentación necesaria; II.- Solicitar de otras autoridades, servidores públicos o particulares todo género de documentos e informes; III.- Practicar las visitas e inspecciones que estime pertinentes por sí o por medio del personal técnico o profesional bajo su dirección; IV.- Citar a las personas que deban comparecer como peritos o testigos; o cualquier otra persona que pueda aportar información, sobre el asunto en trámite; V.- Efectuar todas las demás acciones que juzgue convenientes para el mejor conocimiento del asunto."*

<sup>8</sup> Reglamento Interno de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, artículo 71°.

Estatutal de Derechos Humanos de Nuevo León son muy amplias; el legislador lo determinó así, puesto que la efectividad y eficacia de las investigaciones de este organismo no deben estar subordinadas a la voluntad de las autoridades presuntamente responsables de violar los derechos humanos. Este organismo autónomo siempre valorará de manera positiva el ánimo de colaboración de las autoridades investigadas, pero cuando éste no existe o es muy limitado, esta institución debe ser activa por mandato constitucional y legal.

Por otra parte, esta Comisión desea establecer que la materia de las resoluciones que emite en ejercicio de sus funciones, no involucra pronunciamiento alguno sobre la inocencia o responsabilidad penal de los afectados, sino al respeto a sus derechos humanos por parte de los agentes del Estado, que se contemplan en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en nuestro derecho interno.

**Tercera.** En este capítulo se acreditarán los hechos y, en su caso, se estudiará si aquellos por sí mismos constituyen violaciones a derechos humanos. Los hechos que se desprenden de la queja planteada son los relativos a los derechos a la **libertad personal** y a la **integridad personal**.

El análisis se estructura según los derechos señalados, teniendo el cuerpo del escudriño el siguiente orden: primero se entrará, conforme a las reglas ya descritas, a la acreditación de los hechos. Se tomará en cuenta la parte general de la queja para tratar de englobarlas en una sinopsis, cuidando que lo que no pueda ser así se estudie y se referencie en esta misma parte; segundo, de haberse acreditado los hechos, se analizará las obligaciones de la autoridad conforme al marco normativo del derecho humano en que incide lo acreditado; y tercero, se sopesará, conforme a lo acreditado y al estudio realizado de la obligación, si la autoridad incurrió en una violación a derechos humanos o no.

---

*"Artículo 71º.- Durante la investigación de una queja, los Visitadores Generales, Adjuntos o cualquier funcionario que sea designado para el efecto, podrán presentarse a cualquier oficina administrativa o centro de reclusión para comprobar los datos que sean necesarios, hacer las entrevistas personales pertinentes, sea con autoridades o con testigos, o proceder el estudio de los expedientes o documentación necesarios. Las autoridades están obligadas a dar las facilidades que se requieran para el buen desempeño de las labores de investigación.*

*En caso de que la autoridad estime de carácter reservado la documentación solicitada, se estará a lo dispuesto por el Artículo 63 de la Ley. Independientemente de lo anterior, la falta de colaboración de las autoridades a las labores de los funcionarios de la Comisión podrá ser motivo de la presentación de una denuncia en su contra ante su superior jerárquico, además de la amonestación a que se refiere el último párrafo del Artículo 66 de nuestra ley.*

*Cuando a juicio del Presidente de la Comisión, el acto u omisión en que haya incurrido la autoridad responsable sea considerado como delito, según la Ley penal aplicable, se presentará la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público."*

## 1. Libertad Personal

a) Hechos. En términos generales, la víctima señaló que aproximadamente a las 9:00 horas del 26-veintiséis de julio de 2012-dos mil doce fue detenida con engaños por la policía ministerial para que divulgara información sobre el supuesto robo al Sr. \*\*\*\*\*.

Respecto de lo anterior, esta comisión pudo allegarse de la puesta a disposición de la Sra. \*\*\*\*\*. En dicho parte, se aprecia que la versión de la detención es que la policía ministerial, previa denuncia, pesquisas y entrevista con la agraviada, presentó a la víctima ante el Representante Social porque ésta decidió acompañar voluntariamente a los agentes policiales que la abordaron para aclarar los hechos del supuesto robo que había sufrido el Sr. \*\*\*\*\*.

Así entonces, la discrepancia entre las versiones no estriba ni en el lugar ni tiempo de los hechos, pues estos coinciden; sino en que, según la autoridad, la víctima decidió voluntariamente acompañar a la policía ministerial y, por tanto, no existió una detención como tal.

Esta Comisión estima preciso hacer la siguiente aclaración. El **artículo 7.1** de la **Convención Americana sobre Derechos Humanos** (de ahora en adelante Convención Americana o Convención) establece que *“toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales”*. La intención de la Convención es, según la misma **Corte Interamericana de Derechos Humanos** (de ahora en adelante Corte Interamericana o Corte), regular la libertad ambulatoria que goza una persona<sup>9</sup>, y por tal motivo es que la libertad siempre será la regla general y la limitación, que debe estar regulada, la excepción.

En la actualidad, por lo ambiguo que conlleva la expresión libertad, no existe una definición jurídica de la misma. Aun así, dicho concepto se puede definir

---

<sup>9</sup> Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez. Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Noviembre 21 de 2007, párrafo 53.

“53. En lo que al **artículo 7** de la Convención respecta, éste **protege exclusivamente el derecho a la libertad física** y cubre los comportamientos corporales que presuponen la presencia física del titular del derecho y que se expresan normalmente en el movimiento físico [...]Es así como se explica que el artículo 7.1 consagre en términos generales el derecho a la libertad y seguridad y los demás numerales se encarguen de las diversas garantías que deben darse a la hora de privar a alguien de su libertad. De ahí también se explica que la forma en que la **legislación interna afecta al derecho a la libertad es característicamente negativa**, cuando permite que se prive o restrinja la libertad. Siendo, por ello, **la libertad siempre la regla y la limitación o restricción siempre la excepción.**”.

a través de su antónimo, la privación de la libertad. Las disposiciones generales de los **Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas** establecen que la privación de libertad es:

*“Cualquier forma de detención, encarcelamiento, institucionalización, o custodia de una persona, por razones de asistencia humanitaria, tratamiento, tutela, protección, o por delitos e infracciones a la ley, **ordenada por o bajo el control de facto de una autoridad judicial o administrativa o cualquier otra autoridad**, ya sea en una institución pública o privada, **en la cual no pueda disponer de su libertad ambulatoria**. Se entiende entre esta categoría de personas, no sólo a las personas privadas de libertad por delitos o por infracciones e incumplimientos a la ley, ya sean éstas procesadas o condenadas, sino también a las personas que están bajo la custodia y la responsabilidad de ciertas instituciones, tales como: hospitales psiquiátricos y otros establecimientos para personas con discapacidades físicas, mentales o sensoriales; instituciones para niños, niñas y adultos mayores; centros para migrantes, refugiados, solicitantes de asilo o refugio, apátridas e indocumentados; y cualquier otra institución similar destinada a la privación de libertad de personas”.*

Por todo lo anterior, se puede concluir que la privación de libertad es la falta de disposición de la libertad ambulatoria ordenada o controlada por una autoridad, debiendo entender que la libertad es el goce del movimiento físico y espontáneo que tiene toda persona.

Definido lo anterior, y regresando al caso concreto, se puede destacar que el parte de hechos asienta que la víctima acompañó voluntariamente a los agentes aprehensores. Al haberse asentado “acompañó voluntariamente”, la expresión por sí sola, implica que la agraviada estuvo o fue en compañía de los captores a las instalaciones ministeriales.

Teniendo en cuenta el contexto en que se presentaron los hechos, esta comisión concluye que es imposible que la **Sra. \*\*\*\*\*** haya aceptado ir voluntariamente a las instalaciones ministeriales para aclarar lo relativo a los hechos que le imputaban. Lo anterior, se robustece con varios elementos que devienen de la misma puesta a disposición de la **Sra. \*\*\*\*\*** al Ministerio Público. El parte informativo señala que la persona fue “presentada”, acción que no encuentra justificación legal que no sea la detención de una persona, y puesta a disposición ante el **Agente del Ministerio Público Investigador Especializado en Robos en General Número Dos**, situación que actualiza el elemento de custodia de una detención. Del mismo parte se desprende que la víctima no llegó a las instalaciones ministeriales por medios propios, sino que fue llevada en una unidad ministerial. De igual forma se

desprende que fue abordada a las 09:00 horas del 26-veintiséis de julio del año en curso y puesta a disposición a las 15:17 horas del mismo día, es decir con un retardo de más de 6-seis horas que hace inverosímil llegar a creer la versión de un acompañamiento voluntario y robustece la versión de una detención arbitraria. Finalmente, y posteriormente se ahondará en ello, la víctima presenta lesiones no explicadas al momento de ser puesta a disposición del Representante Social, situación que le da veracidad a la versión de la detención y no del supuesto acompañamiento voluntario.

Por si lo anterior no fuera suficiente, obra en el expediente la comparecencia del elemento captor \*\*\*\*\*ante el **Agente del Ministerio Público Investigador Número Dos en Delitos Patrimoniales Especializados en Robo en General** el 26-veintiséis de julio de 2012-dos mil doce en la cual dijo, al mostrarle a la detenida físicamente, *“la reconozco plenamente y sin lugar a dudas como la misma persona que **detuve** en los términos ya mencione por ser señalada por el denunciante por presunta responsable del robo del efectivo que sufrió en su domicilio.”* (sic). Idéntica situación se puede apreciar en la comparecencia del otro elemento captor de nombre \*\*\*\*\* al señalar *“la reconozco plenamente y sin temor a equivocarme como la misma persona **que detuvimos** por ser señalada por el denunciante como la presunta responsable del robo del efectivo que sufrió en su domicilio.”* (sic).

Todo lo anteriormente evidenciado, aunado a la presunción de veracidad desprendida de la falta de rendición del informe documentado, ciñe la dinámica de hechos con los elementos de la detención: el menoscabo de la libertad ambulatoria al estar más de 6-seis horas retenida y la custodia de ese menoscabo al ser la policía quien la trasladó y retuvo para ponerla a disposición del Ministerio Público. Es por lo señalado que este organismo tiene por cierta la detención de la **Sra. \*\*\*\*\*** tal y como lo señaló en su queja.

**b) Marco normativo del derecho a la libertad y seguridad personales.** Este derecho encuentra su sustento tanto en el ámbito local e internacional. En cuanto al derecho internacional, el Estado mexicano es parte del tratado internacional más importante en materia de derechos humanos en el continente americano<sup>10</sup>. Así la **Convención Americana** en su **artículo 7**<sup>11</sup> regula el derecho a la libertad y seguridad personales.

---

<sup>10</sup> El derecho a la libertad personal también está regulado en el: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 9; Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 3; Convención Internacional para la Protección de todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas; y Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

<sup>11</sup>Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 7:

La prerrogativa exige, según la Corte, las siguientes obligaciones cuando se restrinja la libertad de una persona: que la detención sea lícita, que se le digan de las razones y motivos y cargos de su detención y que sea remitido sin demora ante funcionario jurisdiccional que pueda realizar un control judicial de su detención<sup>12</sup>; obligaciones que se analizarán a continuación.

**i) En cuanto a la licitud de la detención**, porque así lo ha requerido la Corte, y por la propia naturaleza de la figura, es necesario dirigirnos al derecho interno y analizar el aspecto material y formal de la detención; es decir las causas que la determinaron y las condiciones y procedimientos en que se ejecutó<sup>13</sup>.

---

*"Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. 4. Toda persona detenida o retenida **debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.** 5. Toda persona detenida o retenida **debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales** y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio [...]"*.

<sup>12</sup> Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez. Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Noviembre 21 de 2007, párrafo 51.

*"51. El artículo 7 de la Convención **tiene dos tipos de regulaciones** bien diferenciadas entre sí: una **general** y otra **específica** [...] la específica **está compuesta por una serie de garantías que protegen el derecho a no ser privado de la libertad ilegalmente** (art. 7.2) o **arbitrariamente** (art. 7.3), a **conocer las razones de la detención** y los cargos formulados en contra del detenido (art. 7.4), **al control judicial** de la privación de la libertad y la razonabilidad del plazo de la prisión preventiva (art. 7.5) [...]"*.

<sup>13</sup> Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Usón Ramírez Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Noviembre 20 de 2009, párrafo 145.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Gangaram Panday Vs. Surinam. Fondo, Reparaciones y Costas. Enero 21 de 1994, párrafo 47.

*"145. El numeral 2 del artículo 7 reconoce la garantía primaria del derecho a la libertad física: la reserva de ley, según la cual, **únicamente a través de una ley puede afectarse el derecho a la libertad personal.** Al respecto, esta Corte ha establecido que la **reserva de ley debe forzosamente ir acompañada del principio de tipicidad**, que obliga a los Estados a establecer, tan concretamente como sea posible y 'de antemano', las 'causas' y 'condiciones' de la privación de la libertad física. De este modo, **el artículo 7.2 de la Convención remite automáticamente a la normativa interna.** Por ello, **cualquier requisito establecido en la ley nacional que no sea cumplido al privar a una persona de su libertad, generará que tal privación sea ilegal y contraria a la Convención Americana.**"*

*"47. Esta disposición contiene como garantías específicas, descritas en sus incisos 2 y 3, la prohibición de detenciones o arrestos ilegales o arbitrarios, respectivamente. Según el primero de tales supuestos normativos, nadie puede verse privado de la libertad personal sino por las causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley (**aspecto material**), pero, además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos por la misma (**aspecto formal**) [...]"*

Como se desprende de esta resolución, los hechos narrados tienen que ver con conductas delictivas. Al respecto, la **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos** (de ahora en adelante Constitución o Carta Magna), aplicable al caso en concreto, establecía en el **artículo 16**<sup>14</sup> lo siguiente:

*“Artículo 16. **Nadie puede ser molestado** en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, **sino en virtud de mandamiento escrito** de la autoridad competente, que **funde y motive** la causa legal de procedimiento.*

***No podrá librarse orden de aprehensión** sino por la autoridad judicial y **sin** que preceda **denuncia o querrela** de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado.*

*La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, **deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna** y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal. **En los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público.***

*Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder.*

*En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley. Ningún indiciado podrá ser retenido por el*

---

<sup>14</sup> La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 16 antes de la entrada en vigor del decreto de 18 de junio de 2008 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en especial en materia de justicia penal oral y seguridad pública; en el artículo segundo transitorio se establece que el sistema penal acusatorio previsto en los artículo 16 párrafo segundo y décimo tercero; 17 párrafo tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años, contado a partir del día siguiente de la publicación de este decreto. Para estos casos en particular aplica los artículos transitorios del decreto número 118 publicado en el periódico oficial del Estado número 142 de fecha 28 de octubre de 2010, que establecen la entrada en vigor progresiva del sistema penal acusatorio en el estado de Nuevo León según el delito que se tipifique a partir de los hechos en cada caso concreto.

*Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal. [...]*"

De la anterior transcripción, se puede concluir que, cuando se incurra en un delito, una persona podrá ser privada de la libertad a través de orden escrita, motivada, fundada y expedida por autoridad competente o, también, cuando se dé el supuesto de la flagrancia. Asimismo, impone el mismo precepto constitucional, que la orden debe ser expedida por autoridad judicial y que, excepcionalmente, sólo en el caso de urgencia y bajo ciertos requisitos, el Ministerio Público podrá girar orden de detención.

En el caso de la flagrancia y urgencia, el **artículo 134 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Nuevo León**, establece que:

*"Artículo 134*

***Se entiende que hay delito flagrante cuando el indiciado es detenido en el momento de estarlo cometiendo.*** También cuando inmediatamente de ejecutado el hecho delictuoso:

- 1) El indiciado es perseguido materialmente; o*
- 2) Alguien lo señala como responsable; o*
- 3) Se encuentre en su poder el objeto del delito o el instrumento con que se hubiera cometido; o*
- 4) Existan huellas o indicios que hagan presumir fundadamente su intervención en la comisión del delito.*

***Lo anterior siempre y cuando no haya transcurrido un plazo de setenta y dos horas, desde la comisión de los hechos delictuosos.***

*Se entiende que existe caso urgente cuando el Ministerio Público exprese y funde los indicios que acrediten:*

- a) Que el indiciado haya intervenido en la comisión de alguno de los casos señalados como delitos graves en el código penal;*
- b) Que sean delitos que se persigan de oficio;*
- c) Que exista riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia; y*
- d) Que por razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, no pueda ocurrir ante la autoridad judicial para solicitar la orden de aprehensión. [...]"*

Por todo lo anterior, solamente es posible detener a una persona por la comisión de un delito cuando haya: flagrancia o cuasiflagrancia, orden de aprehensión u orden de detención por caso de urgencia.

En otro orden de ideas, como reza el artículo 16, todo acto debe estar fundado y motivado. La flagrancia no debe ser la excepción y debe encontrar un sustento razonable para calificar la detención de legal. Esta comisión ve que se puede cumplir lo anterior cuando el actuar del detenedor se encuentra ajustado a los siguientes requisitos.

El primero de ellos, es la existencia de una conducta (requisito de orden ontológico). El segundo requisito es la existencia del tipo penal (requisito de orden normativo). El tercer requisito, y el indispensable para que se de la flagrancia o cuasiflagrancia, es que la conducta o los hallazgos se relacionen con la posibilidad de la comisión de un delito. Sería temerario concebir a la flagrancia de otra forma, ya que, de ser así, cualquier detención se podría justificar en la sospecha, y generaría un marco de incertidumbre e inseguridad jurídica.

ii) En cuanto a la información de las razones de la detención y de la notificación de los cargos, los instrumentos internacionales<sup>15</sup> señalan que los motivos del arresto deberán ser informados de manera sencilla, pudiendo ser de forma oral<sup>16</sup> y al momento de la detención<sup>17</sup> y que la notificación del

---

<sup>15</sup> Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión de Naciones Unidas, principio 10.

*"Principio 10*

*Toda persona arrestada será informada en el momento de su arresto de la razón por la que se procede a él y notificada sin demora de la acusación formulada contra ella."*

<sup>16</sup> Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez. Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Noviembre 21 de 2007, párrafo 71 y 76.

*"71. La información sobre los motivos y razones de la detención **necesariamente supone informar, en primer lugar, de la detención misma. La persona detenida debe tener claro que está siendo detenida. En segundo lugar, el agente que lleva a cabo la detención debe informar en un lenguaje simple, libre de tecnicismos, los hechos y bases jurídicas esenciales en los que se basa la detención. No se satisface el artículo 7.4 de la Convención si sólo se menciona la base legal."***

*"76. En segundo lugar, la primera obligación del artículo 7.4 de la Convención **no especifica que la información que el detenido debe recibir tenga que ser escrita. Para esta Corte, puede satisfacerse dicha obligación de manera oral, no así la segunda obligación del artículo 7.4 de la Convención, referente a la notificación, sin demora, del cargo o cargos formulados contra el detenido, la cual debe darse por escrito [...]"***

<sup>17</sup> Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Noviembre 26 de 2010, párrafo 105.

*"105. Esta Corte ha establecido que, a la luz del artículo 7.4 de la Convención Americana, **la información de los 'motivos y razones' de la detención debe darse 'cuando ésta se produce'**, lo cual constituye un mecanismo para evitar detenciones ilegales o arbitrarias desde el momento mismo de la*

cargo y acusación deberá ser sin demora y por escrito. Asimismo señala que este derecho presupone la información de la detención misma, es decir que la persona tenga claro que está siendo detenida.

**iii) En cuanto al control de la detención**, además de que es necesario para evitar la arbitrariedad o ilegalidad<sup>18</sup> de las detenciones, éste es un mecanismo o garantía que tiene el detenido para que se califique la detención y, en su caso, se le restituya su libertad ambulatoria.

La **Constitución Mexicana** en su **artículo 21** le deja al Ministerio Público el monopolio de la investigación y del ejercicio de la acción penal<sup>19</sup>. Por tal motivo, es necesario distinguir que el funcionario autorizado por ley para garantizar el debido proceso legal durante la etapa de investigación penal es el Ministerio Público<sup>20</sup>, toda vez que, según el **artículo 133**<sup>21</sup> del **Código de**

---

*privación de libertad y, a su vez, garantiza el derecho de defensa del individuo. Asimismo, esta Corte ha señalado que el agente que lleva a cabo la detención **debe informar en un lenguaje simple, libre de tecnicismos, los hechos y bases jurídicas esenciales en los que se basa la detención. No se satisface el artículo 7.4 de la Convención si sólo se menciona la base legal.***"

<sup>18</sup> Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez. Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Noviembre 21 de 2007, párrafo 81.

*"81. La parte inicial del artículo 7.5 de la Convención dispone que la detención de una persona **debe ser sometida sin demora a revisión judicial. El control judicial inmediato es una medida tendiente a evitar la arbitrariedad o ilegalidad de las detenciones [...]**"*

<sup>19</sup> Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 21.

*"Artículo 21.*

***La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.***

***El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial.***

*[...]*

*El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley.*

*[...]"*

<sup>20</sup> Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Noviembre 26 de 2010, párrafo 96.

*"96. Al margen de si en el presente caso existió o no flagrancia, en dicho supuesto, cuando la detención ocurre por parte de una autoridad, **el derecho mexicano distingue entre dos momentos para valorar el alcance del control sobre la detención. El primer momento se relaciona con la remisión inmediata ante autoridad competente por parte de la autoridad que detiene. El segundo momento corresponde a la remisión que debe efectuar el Ministerio Público a un juez en el plazo de 48 horas.***"

<sup>21</sup> Código de Procedimientos Penales del Estado de Nuevo León, artículo 133.

**Procedimientos Penales del Estado de Nuevo León**, el Representante Social puede dejar en libertad al detenido cuando su detención fuera injustificada.

Asimismo, es importante hacer hincapié en que la Corte ha señalado que el término "sin demora" debe analizarse según el contexto y las circunstancias de cada caso en particular. Lo anterior se robustece con la siguiente transcripción:

*"101. Consecuentemente, la Corte constata que desde el momento de la detención de las presuntas víctimas los agentes del Ejército contaron con más de un medio para transportarlas y llevarlas sin demora, primero ante el Ministerio Público y, posteriormente, ante la autoridad judicial, por lo menos el día 3 de mayo de 1999. Además, cabe reiterar que la autoridad del Ministerio Público de Arcelia se presentó al lugar de los hechos a las 08:00 horas del 4 de mayo de 1999 y, no obstante ello, no asumió la custodia de las presuntas víctimas (supra párr. 97).*

*102. Siguiendo la jurisprudencia del Tribunal (supra párr. 93) en lo que concierne a la autoridad competente para la remisión sin demora, este Tribunal reitera que los señores Cabrera y Montiel debieron ser llevados ante el juez lo más pronto posible y, en este caso, ello no ocurrió sino hasta casi 5 días después de su detención. En ese sentido, el Tribunal observa que los señores Cabrera y Montiel fueron puestos a disposición de la autoridad competente excediendo el término establecido en la Convención Americana, que claramente exige la remisión "sin demora" ante el juez o funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales sobre control de la libertad. Al respecto, la Corte reitera que en zonas de alta presencia militar, donde los miembros de la institución militar asumen control de la seguridad interna, la remisión sin demora ante las autoridades judiciales cobra mayor importancia con el fin de minimizar cualquier tipo de riesgo de violación a los derechos de la persona (supra párr. 89). En consecuencia, la Corte considera que se vulneró el artículo 7.5 de la Convención Americana en perjuicio de los señores Cabrera y Montiel. Además, dada la falta de remisión sin demora ante la autoridad competente, el Tribunal considera que esta irregularidad en el control de la detención la transformó en arbitraria y no estima pertinente hacer ningún tipo de pronunciamiento sobre la causa que originó la misma. Por tanto, la Corte declara la violación del artículo 7.3, en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana."<sup>22</sup>*

---

*"Artículo 133[...] El Ministerio Público, si recibe diligencias de Policía Ministerial con detenidos, y la detención fuera injustificada, ordenará que queden en libertad con las reservas de Ley. [...]"*

<sup>22</sup> Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Noviembre 26 de 2010, párrafos 101 y 102.

En la jurisprudencia citada, la Corte tomo en cuenta, además de lo transcrito, que la autoridad contaba con helicópteros para poder transportar al detenido y la ubicación geográfica de la zona. Por tal motivo el término sin demora debe entenderse como lo más pronto posible que la autoridad, ateniendo las circunstancias y contexto de los hechos, pudo haber puesto al detenido a disposición del funcionario que ejerce el control de la detención. Siendo evidente entonces, que dicho termino debe ser justificado por la autoridad por ser esta una obligación estatal.

**c) Conclusiones.** A continuación, con base a los hechos acreditados y el marco normativo referido, se determinará si los hechos narrados en la queja son constitutivos de violaciones a derechos humanos.

**i) Detención Ilícita.** Esta comisión tuvo por acreditada la detención de la víctima tal y como lo estableció. El **artículo 16 constitucional** consagra que todo acto de autoridad debe ser realizado por escrito y autoridad competente y debe estar fundado y motivado.

Este organismo observa que de las constancias obrantes en el expediente de queja no existe orden judicial alguna que justifique la detención de la agraviada, incumpliendo así el requisito de literalidad señalado, siendo entonces los supuestos de la flagrancia los únicos que hubieran podido justificar la detención y así cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación.

Esta comisión concluye que de la dinámica de hechos narrada por la víctima y de los hechos narrados en el parte ministerial es imposible actualizar la figura de la flagrancia y de la flagrancia equiparada. La víctima no fue abordada ni sorprendida al momento de la ejecución de un delito, sino al contrario, fue detenida mientras ella se encontraba trabajando en la clínica dental. Asimismo, del parte informativo, y de la anterior denuncia del **Sr. \*\*\*\*\***, es imposible determinar el tiempo en que sucedieron los supuestos hechos delictivos, sólo se señala que el denunciante se percató de la ausencia de una cantidad de dinero, pero no se desprende desde cuándo tuvo conocimiento de aquello ni cuando sucedieron los hechos, y mucho menos expone en su denuncia que le conste el momento del supuesto apoderamiento del dinero por parte de la **Sra. \*\*\*\*\***.

La flagrancia equiparada tiene, según se expuso, una vigencia de 72-setenta y dos horas desde la comisión del delito, si no se señala el tiempo exacto en que se actualizó una conducta punible, la autoridad resulta impedida para poder justificar una detención en la cuasiflagrancia. Si bien es cierto existe la denuncia del **Sr. \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*** el 24-veinticuatro de julio de 2012-dos mil doce y en ella señaló que sospechaba de la agraviada con motivo de las labores domésticas que ella desempeñaba y ciertas actitudes que había

observado en ella últimamente, también lo es que en dicha comparecencia no se aprecia la existencia de alguna expresión por parte del denunciante que señale el momento ni exacto ni aproximado del apoderamiento del dinero en efectivo, sólo señaló que a las 10:00 horas del 23-veintitrés de julio de 2012-dos mil doce se percató de la ausencia del dinero, mas no de su apoderamiento por parte de la agraviada, término que es imposible llegar a tomarse en consideración como el momento en que se cometió el robo.

En el presente caso, si la policía ministerial tenía la sospecha de que la víctima pudo participar en el robo, ésta debió informar al Representante Social para que la mandara a citar y así rindiera su declaración ministerial, toda vez que, se vuelve hacer hincapié, no se actualizaba la flagrancia, flagrancia equiparada o el supuesto de urgencia para llevar a cabo una detención. Por otro lado, si la autoridad ministerial tenía indicios que llevaran a la probable responsabilidad de la agraviada con relación a un delito, la primera debió solicitar a las autoridades judiciales una orden para poder llevar a cabo una detención lícita.

Sin embargo, lo anterior no se actualizó y se tuvo por acreditado que la autoridad trató de justificar la detención en un supuesto acompañamiento voluntario. Por lo anterior, este organismo concluye que la **Sra. \*\*\*\*\*** sufrió una detención ilícita, violando así los artículos **16** de la **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, **7.1** y **7.2** de la **Convención Americana sobre Derechos Humanos** y **9.1** del **Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos**, en relación con los **artículos 1** y **133** de la **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**.

**ii) Motivos y Razones de la detención.** En el inciso de la acreditación de hechos se concluyó como ciertos los que narró la víctima. Como la exposición de las razones y motivos de la detención, así como su control ministerial, es una obligación positiva del Estado<sup>23</sup>, le corresponde a este último demostrar su cumplimiento en cada detención y, por ende, este organismo debe analizarla de oficio.

Del parte informativo, documento idóneo para que la autoridad acredite la obligación en comento, hace inevitable señalar que se actualiza la violación a derechos humanos. De la jurisprudencia de la Corte Interamericana se

---

23 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Tibi Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Septiembre 7 de 2004, párrafo 108.

*“108. Los incisos 4, 5 y 6 del artículo 7 de la Convención Americana establecen obligaciones de carácter positivo que imponen exigencias específicas tanto a los agentes del Estado como a terceros que actúen con la tolerancia o anuencia de éste y sean responsables de la detención.”.*

concluye que cuando se actualiza una detención ilícita no es ni si quiera necesario entrar al estudio de esta garantía pues se entiende que aquellos motivos y razones no fueron los verdaderos<sup>24</sup>.

Este organismo considera que desde que no se le dijo a la agraviada ni siquiera que estaba detenida se presentó la violación. Del parte informativo de la policía ministerial no consta que a la víctima se le haya informado, al momento de haber sido abordada por los agentes ministeriales, que a partir de ese momento estaba siendo objeto de una detención con motivo de una investigación de un robo, sino que fue abordada con engaños para poder hacerla subir a la unidad ministerial.

De la puesta a disposición, sólo se advierte que los elementos captadores se identificaron y le explicaron del porqué de su presencia sin que se pueda apreciar que se les haya explicado los motivos concretos por los cuales estaba siendo detenida; si únicamente se asienta en el parte que se informó de los motivos, dicho este en términos genéricos e imprecisos, sin referir cuáles motivos específicos y concretos, esta comisión está en imposibilidad de analizar si estos efectivamente se dieron y, si de haberse dado, fueron sencillos y sin tecnicismos y si fueron los motivos y razones correctos.

Por todo lo anterior, este organismo considera que la **Policía Ministerial de la Agencia Estatal de Investigaciones** violó los derechos humanos de la **Sra. \*\*\*\*\***, al realizar una detención arbitraria contraviniendo los artículos **7.1, 7.3 y 7.4** de la **Convención Americana sobre Derechos Humanos** y **9.1 y 9.2** del **Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos**, en relación con los **artículos 1 y 133** de la **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**.

**iii) Control de la detención.** Tanto la víctima como la autoridad señalaron que aquella fue abordada por la policía ministerial a las 09:00 horas del 26-veintiséis de julio de 2012-dos mil doce. Sin embargo, el sello de recepción del parte informativo asienta que el Representante Social recibió el reporte y, por ende, a la víctima hasta las 15:17 horas del mismo día; es decir, mediaron entre la detención y la puesta a disposición más de 6-seis horas.

---

24 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Tibi Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Septiembre 7 de 2004, párrafos 111 y 113.

"111. En el caso sub judice se ha demostrado que el señor Tibi, al momento de su detención, efectuada el 27 de septiembre de 1995, **no fue informado de las verdaderas razones de aquélla**, ni notificado de los cargos que se le imputaban y los derechos con que contaba, y tampoco se le mostró la orden de detención, que el Juez Primero de lo Penal del Guayas dictó un día después, 28 de septiembre de 1995. La razón que se le dio fue que se trataba de un control migratorio (supra párr. 90.11).".

"113. Con base en lo anteriormente expuesto, esta Corte considera que el Estado violó el artículo 7.4 de la Convención, en perjuicio del señor Daniel Tibi.".

Como se advirtió en el apartado del marco normativo, el término sin demora se debe estudiar no en términos aritméticos per se sino bajo el contexto en que la puesta a disposición se llevó a cabo. Por eso, es necesario que la autoridad explique del porqué la puesta a disposición se realizó con demora.

En el presente caso, esta comisión considera injustificado que la autoridad se haya tardado más de seis horas para poner a la detenida a disposición del Representante Social; ni cuestiones de distancia o logística podrían justificar el lapso de más de 6-seis horas, lo que le da veracidad a la versión de hechos de la víctima en relación con que una vez detenida fue entrevistada por los agentes ministeriales en vez de ser puesta lo más pronto posible ante el Representante Social.

Por tal situación, esta comisión determina que la **Sra. \*\*\*\*\*** sufrió una detención arbitraria al no haber sido puesta inmediatamente a disposición de autoridad competente para que controlara su detención, incurriendo así en violaciones a los artículos **7.1, 7.3 y 7.5** de la **Convención Americana sobre Derechos Humanos** y **9.1 y 9.3** del **Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos**, en relación con los **artículos 1 y 133** de la **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**.

## 2. Integridad Personal

**a) Hechos.** En términos generales, la **Sra. \*\*\*\*\*** refirió que sufrió menoscabo en su integridad personal al ser golpeada a cachetadas y a puñetazos en la cabeza. Asimismo, refirió que fue víctima del método de la bolsa con fines de asfixia.

La dinámica de hechos coincide con la lesión que la **Dirección de Criminalística y Servicios Periciales** certificó a las 13:40 horas del 26-veintiséis de julio de 2012-dos mil doce; es decir, casi cinco horas después de que se materializó la detención de la víctima.

<p>Hechos de queja planteados por la <b>Sra. *****</b>.</p>	<p>Certificación médica de la <b>Dirección de Criminalística y Servicios Periciales</b> de fecha 26 de julio de 2012, con número de folio 12641, a la <b>Sra. *****</b>.</p>	<p>Certificación médica de la <b>Comisión Estatal de Derechos Humanos</b> a la <b>Sra. *****</b> el 1 de agosto del 2012.</p>
<p>"[...] y en ese momento ese ministerial, le dio una cachetada en mejilla izquierda[...] y este ministerial le dio otra cachetada en la mejilla derecha, a la vez que le</p>	<p>Equimosis en párpado inferior izquierdo.</p>	<p><i>Equimosis orbitaria inferior en tercio interior y medio del lado izquierdo, laceración de membrana timpánica de oído izquierdo.</i></p>

<p>dijo [...] 'es más espósenla y tráeme una bolsa' [...] mismo ministerial de tez blanca, le pone la bolsa de plástico en su cabeza, cubriéndole el rostro, a la vez que alguien le apretaba la misma [...] agrega que en ese momento le dieron varios golpes en la cabeza, con el puño cerrado, sin saber precisar cuántos golpes recibió pero fueron varios; que debido a que ya no podía respirar le quitaron las bolsas[...]"</p>		
--	--	--

El dictamen médico de la **Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León** constata que el día en que se detuvo a la agraviada presentaba lesiones en la zona de su ojo. La existencia de dicha lesión fue certificada por el médico de esta comisión el 01-primero de agosto de 2012-dos mil doce, asimismo determinó que la lesión había sido producida seis días antes, resultando así coincidente con el tiempo en que la víctima estuvo bajo la custodia de los agentes policiales a quienes les atribuye las lesiones, puesto que la temporalidad que da el médico de este organismo señala que la lesión fue inferida el 26-veintiséis de julio de 2012-dos mil doce, mismo día en que la víctima estuvo bajo la custodia de los agentes ministeriales.

Además de la coincidencia entre las lesiones certificadas y la dinámica de hechos expuesta, no pasan inadvertidas las diversas fotografías que obran en el expediente en donde se puede constatar la lesión certificada y que el 26-veintiséis de julio de 2012-dos mil doce, en la declaración informativa ministerial de la **Sra. \*\*\*\*\***, se dio fe de que la víctima presentaba un hematoma en el pómulo izquierdo, lesión que robustece la versión de la queja.

Por todo lo anterior, aunado a la presunción de veracidad desprendida de la falta de rendición del informe documentado, y teniendo en cuenta que la víctima estuvo más de seis horas incomunicada coactivamente por parte de los agentes aprehensores, esta comisión considera que se acredita el menoscabo sólo en cuanto a la dinámica de golpes narrada por la víctima en su queja, toda vez que existen certificados médicos que coinciden con la agresión que relató la agraviada y que no fueron explicadas por la autoridad aprehensora.

**b) Marco normativo del derecho a la Integridad.** Los derechos humanos encuentran su justificación en que son una forma de limitar el poder gobernador del Estado<sup>25</sup>. El reconocimiento de estos derechos implican que el último garantice (obligaciones positivas o de hacer) y respete (obligaciones negativas o de no hacer) los mismos. Por eso, sobre cada derecho siempre habrá acciones y omisiones que se deban observar en las actuaciones de la autoridad<sup>26</sup>.

Sus características son las de universalidad, inalienabilidad, indivisibilidad, interdependencia, entre otras. En cuanto a las últimas dos, éstas hacen a los derechos humanos estar relacionados entre sí, por tal motivo en el goce de un derecho puede estar involucrada otra prerrogativa y la misma situación puede ocurrir en caso de que se viole alguno de ellos.

Tal situación se puede observar cuando una persona es privada de la libertad. La **Convención Americana** en el artículo **5.2** contempla que “*toda*

---

<sup>25</sup> Esta aseveración se respalda en la obra de Jorge Carpizo titulada *Derechos Humanos y Ombudsman*, de la editorial Porrúa y de la Universidad Nacional Autónoma de México; toda vez que en la página 46 señala “Aquí es donde aparece la figura del Ombudsman como un instrumento más, pero importante, en el complejo mecanismo que tiende a controlar el poder en beneficio de la libertad, la igualdad y la seguridad jurídica de personas”.

Con todo lo anterior, entonces, se puede concluir que, en vista que la Comisión Nacional y esta Comisión, comparando su marco normativo, tienen naturaleza jurídica similar, misma que se asemeja a la de un *Ombudsman*, las Comisiones de esta naturaleza deben permanentemente ir construyendo acciones para ganarse o mantener la confianza de la sociedad.

<sup>26</sup> Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Noviembre 16 de 2009, párrafos 234 a 236.

“234. El Tribunal ha establecido que, de acuerdo con el artículo 1.1 de la Convención, los **Estados** están **obligados a respetar y garantizar** los derechos humanos reconocidos en ella. La responsabilidad internacional del Estado se **funda en actos u omisiones** de cualquier poder u órgano de éste, independientemente de su jerarquía, que violen la Convención Americana.

235. En cuanto al **deber de respeto** [...] es la de ‘respetar los derechos y libertades’ reconocidos en la Convención. Así, en la protección de los derechos humanos, está **necesariamente comprendida** la noción de la **restricción al ejercicio del poder estatal**.

236. Sobre la **obligación de garantía** la Corte ha establecido que puede ser **cumplida** de **diferentes maneras**, en función del derecho específico que el Estado deba **garantizar** y de las particulares **necesidades** de protección. Esta obligación implica el deber de los Estados de **organizar** todo el **aparato gubernamental** y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de **asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos**. Como parte de dicha obligación, el Estado está en el deber jurídico de **prevenir, razonablemente, las violaciones** de los derechos humanos [...] Lo decisivo es dilucidar ‘si una determinada violación [...] ha tenido lugar con el apoyo o la tolerancia del poder público o si éste ha actuado de manera que la trasgresión se haya cumplido en defecto de toda prevención o impunemente’.”.

persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”, reflejándose así la interdependencia que existe entre los derechos a la libertad personal y a la integridad personal.

De igual forma los órganos interamericanos de derechos humanos han establecido que el Estado (autoridad) se convierte en garante de los demás derechos humanos no restringidos a un detenido, ya que la persona al ser privada de la libertad pierde arbitrio en sus decisiones y el goce de sus derechos se ve supeditado a la voluntad del garante<sup>27</sup>.

Señalado lo anterior, es necesario examinar el derecho a la integridad personal. Este derecho encuentra su marco normativo en distintos instrumentos del derecho interno e internacional. En nuestro derecho interno se encontraba regulado, al momento de los hechos, en **la fracción II, del apartado A, del artículo 20** de la **Constitución** al señalar en relación con una persona imputada de un delito:

*“No podrá ser obligado a declarar. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida ante cualquier autoridad distinta del Ministerio Público o del juez, o ante éstos sin la asistencia de su defensor carecerá de todo valor probatorio.”.*

Más puntual encuentra esta Comisión lo que establece el **artículo 5** de la **Convención**<sup>28</sup> al asentar que la integridad personal<sup>29</sup> no sólo se refiere al

---

<sup>27</sup> Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas. Diciembre 31 de 2011, párrafo 49.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Bulacio Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Septiembre 18 de 2003, párrafo 126.

*“49. En efecto, el principal elemento que define la privación de libertad es la dependencia del sujeto a las decisiones que adopte el personal del establecimiento donde éste se encuentra recluso. Es decir, las autoridades estatales ejercen un control total sobre la persona que se encuentra sujeta a su custodia. Este particular contexto de subordinación del recluso frente al Estado –que constituye una relación jurídica de derecho público– se encuadra dentro de la categoría ius administrativista conocida como **relación de sujeción especial**, en virtud de la cual el Estado, al privar de libertad a una persona, **se constituye en garante de todos aquellos derechos que no quedan restringidos por el acto mismo de la privación de libertad [...]**”.*

*“126. Quien sea detenido **‘tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal’**. La Corte ha establecido que el **Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante** de estos derechos de los detenidos [...] La forma en que se trata a un detenido debe estar sujeta al escrutinio más estricto, tomando en cuenta la especial vulnerabilidad de aquél [...]*”.

<sup>28</sup> Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 5.

*“Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal. 1. Toda persona **tiene derecho a que se respete su integridad** física, psíquica y moral. 2. **Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles,***

físico, sino también a la psique y a la moral. Así, podemos aseverar que no es necesario que haya vejámenes para poder determinar una violación al derecho a la integridad personal, pues este es un derecho complejo y que exige una regulación estricta al grado que no es posible su suspensión bajo ningún motivo, ni inclusive en las situaciones más adversas y extremas<sup>30</sup>.

Retomando las obligaciones positivas y negativas que señala el **artículo 1.1** de la **Convención Americana**, en el caso del derecho a la integridad, como en todos los derechos, se pueden observar que la autoridad debe cumplir con ciertos actos, para garantizar y prevenir, y omisiones, para no incurrir en responsabilidades. La **obligación negativa** implica que la autoridad no debe incurrir en actos que atenten la integridad física, psíquica y moral, aunque, hay que señalar, la Corte ha determinado que por omisiones (violación a las obligaciones positivas) se puede llegar a atentar contra la integridad<sup>31</sup>, siendo entonces la afectación o sufrimiento la que determinará si se actualiza lo establecido en el **artículo 5.2 convencional**.

Esta violación abarca desde penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes hasta tortura. La diferencia entre una y otra radicarán, según lo

---

**inhumanos o degradantes.** *Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano [...]*".

<sup>29</sup> También se encuentra regulada en: Declaración Universal de Derechos Humanos, Art. 3 y 5; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Art. 7 y 10; Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Art. 1; Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, Art. 2 y 3.

<sup>30</sup> Dicha afirmación se funda, entre otros, en el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 27.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Familia Barrios VS. Venezuela. Fondo Reparaciones y Costas. Noviembre 24 de 2011, párrafo 50.

*"50. Por otra parte, la Convención Americana reconoce expresamente el derecho a la integridad personal, bien jurídico cuya protección encierra la finalidad principal de **la prohibición imperativa de la tortura y penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes**. Este Tribunal ha considerado de forma constante en su jurisprudencia que dicha prohibición **pertenece hoy día al dominio del ius cogens. El derecho a la integridad personal no puede ser suspendido bajo circunstancia alguna.**"*

<sup>31</sup> Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Febrero 24 de 2011, párrafo 94.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Noviembre 23 de 2009, párrafo 161.

*"94. Por otro lado, la desaparición forzada de María Claudia García es violatoria del derecho a la integridad personal porque el solo hecho del aislamiento prolongado y de la incomunicación coactiva, representa un tratamiento cruel e inhumano en contradicción con los párrafos 1 y 2 del artículo 5 de la Convención."*

ha dicho la Corte, en la intencionalidad, severidad del sufrimiento y finalidad del acto<sup>32</sup>. Lo que determinará una u otra, o ambas en su caso, será la severidad o gravedad del sufrimiento. Para tal circunstancia, la Corte ha señalado que se deben estudiar los factores endógenos y exógenos<sup>33</sup> de las circunstancias para, después de administrarlo con otras evidencias, concluir si los hechos constituyen tortura o no.

En el mismo orden de ideas, es importante destacar que para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el trato inhumano es aquel que causa deliberadamente sufrimiento mental o psicológico<sup>34</sup>. Respecto al trato degradante, la Corte Interamericana ha señalado que éste se caracteriza por el temor, la angustia y la inferioridad inducida con el propósito de humillar y degradar a la víctima y quebrar su resistencia física y moral<sup>35</sup>.

Ahora bien, si bien es cierto que el apartado 1 del mencionado artículo 5 establece que toda persona tiene derecho a que se le respete su integridad

---

*"161. La Corte ha considerado en numerosos casos que los familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos pueden ser, a su vez, víctimas. En particular, en casos que involucran la desaparición forzada de personas, es posible entender que la violación del derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares de la víctima es una consecuencia directa, precisamente, de ese fenómeno, que les causa un severo sufrimiento por el hecho mismo, que se acrecienta, entre otros factores, por la constante negativa de las autoridades estatales de proporcionar información acerca del paradero de la víctima o de iniciar una investigación eficaz para lograr el esclarecimiento de lo sucedido."*

<sup>32</sup> Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Agosto 31 de 2010, párrafo 118.

*"118. [...] **Esto es así ya que los elementos objetivos y subjetivos que califican un hecho como tortura no se refieren ni a la acumulación de hechos ni al lugar donde el acto se realiza, sino a la intencionalidad, a la severidad del sufrimiento y a la finalidad del acto [...]**".*

<sup>33</sup> Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Familia Barrios VS. Venezuela. Fondo Reparaciones y Costas. Noviembre 24 de 2011, párrafo 52.

*"52. [...] **'[I]a infracción del derecho a la integridad física y psíquica de las personas es una clase de violación que tiene diversas connotaciones de grado y que abarca desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes o tratos crueles, inhumanos o degradantes, cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según los factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada situación concreta'. [...]** Asimismo, el Tribunal ha indicado que **todo uso de la fuerza que no sea estrictamente necesario por el propio comportamiento de la persona detenida constituye un atentado a la dignidad humana en violación del artículo 5 de la Convención Americana.**"*

<sup>34</sup> Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos, Documento 5 rev. 1 corr. 22 de octubre del 2002, párrafo 156.

<sup>35</sup> Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Loayza Tamayo vs. Fondo. Sentencia de 4 de diciembre de 1995, párrafo 57.

personal, también lo es que dicha disposición no es absoluta, pues los instrumentos internacionales<sup>36</sup> establecen el uso de la fuerza legal para menoscabar la integridad y, en su caso, e inclusive, la vida.

La Corte Interamericana ha establecido que, con relación al uso de la fuerza:

*“49. [...] los Estados deben vigilar que sus **cuerpos de seguridad, a quienes les está atribuido el uso legítimo de la fuerza, respeten el derecho a la vida** de quienes se encuentren bajo su jurisdicción. La Corte ha tenido oportunidad de pronunciarse en otros casos acerca de los criterios que determinan el uso legítimo de la fuerza por parte de miembros de cuerpos de seguridad del Estado. A la luz de esos criterios son analizados los hechos de este caso. Al respecto, el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad estatales: **a) debe estar definido por la excepcionalidad**, y debe ser planeado y limitado proporcionalmente por las autoridades. En este **sentido, sólo podrá hacerse uso de la fuerza o de instrumentos de coerción cuando se hayan agotado y hayan fracasado todos los demás medios de control**; b) el uso de la fuerza letal y las armas de fuego contra las personas debe estar prohibido como regla general, y su uso excepcional deberá estar formulado por ley y ser interpretado restrictivamente, no siendo más que el “absolutamente necesario” en relación con la fuerza o amenaza que se pretende repeler; c) debe estar limitado por los principios de proporcionalidad, necesidad y humanidad. **La fuerza excesiva o desproporcionada por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que da lugar a la pérdida de la vida puede por tanto equivaler a la privación arbitraria de la vida [...]**”.*<sup>37</sup>

Con la anterior transcripción, esta Comisión tiene claro que el derecho a la vida no está protegido de forma ilimitada, pues la misma Corte Interamericana contempla que la fuerza excesiva o desproporcionada puede dar lugar a una privación arbitraria de la vida, entendiéndose entonces que puede haber una privación lícita o no arbitraria de la vida.

Lo anterior es relevante porque bajo el principio general de derecho *cui licet, quod est plus, licet utique, quod est minus*<sup>38</sup> el derecho de la integridad tampoco tiene una protección ilimitada y se debe entender que el uso de la

---

<sup>36</sup> Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por parte de Oficiales Encargados de Hacer Cumplir la Ley; Código de Conducta Para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.

<sup>37</sup> Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Familia Barrios VS. Venezuela. Fondo Reparaciones y Costas. Noviembre 24 de 2011, párrafo 49

<sup>38</sup> A quien es lícito lo que es más, ciertamente le es lícito lo que es menos.

fuerza<sup>39</sup> legal es un reflejo de aquello. Lo anterior se afirma pues si la vida, principio que ha dicho la Corte es fundamental y prerequisite para el disfrute de los demás derechos<sup>40</sup>, puede ser limitada, la integridad, al depender de ésta, y tener una línea muy delgada entre ella y aquélla, pues una misma acción pudiera repercutir en una u otra, también puede ser restringida.

Entonces para determinar si el menoscabo de la integridad personal es una violación a derechos humanos o no, es necesario hacer un análisis puntual del uso de la fuerza. La Corte ha determinado que el uso de la fuerza debe observar los siguientes principios: excepcionalidad, proporcionalidad, necesidad y humanidad<sup>41</sup>. Resulta evidente que el principio de excepcionalidad condiciona el análisis de los otros tres principios, pues el uso de la fuerza que no sea excepcional no podrá ser proporcional, necesario ni bajo la observancia de la humanidad.

---

<sup>39</sup> Cabe señalar que éste también está regulado en el sistema legal mexicano, toda vez que en la fracción I del artículo 40 y en el artículo 41 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública se establece que:

*“Artículo 40. Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública se sujetarán a las siguientes obligaciones: I. Conducirse siempre con dedicación y disciplina, así como con apego al orden jurídico y respeto a las garantías individuales y derechos humanos reconocidos en la Constitución [...]”.*

*“Artículo 41. [...] Siempre que se use la fuerza pública se hará de manera racional, congruente, oportuna y con respeto a los derechos humanos. Para tal efecto, deberá apegarse a las disposiciones normativas y administrativas aplicables, realizándolas conforme a derecho.”.*

<sup>40</sup> Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Zambrano Vélez y otros VS. Ecuador. Fondo Reparaciones y Costas. Julio 4 de 2007, párrafo 78.

*“78. La Corte ha considerado reiteradamente que el **derecho a la vida es un derecho humano fundamental**, cuyo **goce pleno es un prerequisite para el disfrute de todos los demás derechos humanos** [...]”.*

<sup>41</sup> Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Zambrano Vélez y otros VS. Ecuador. Fondo Reparaciones y Costas. Julio 4 de 2007, párrafos 83 y 85.

*“83. El **uso de la fuerza** por parte de los cuerpos de seguridad estatales debe estar **definido por la excepcionalidad** [...] **sólo podrá hacerse uso de la fuerza** o de instrumentos de coerción **cuando se hayan agotado y hayan fracasado todos los demás medios de control**.”.*

*“85. El **uso de la fuerza** debe estar limitado por los principios de **proporcionalidad, necesidad y humanidad**. La fuerza excesiva o **desproporcionada** por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que **da lugar a la pérdida de la vida** puede por tanto equivaler a la privación arbitraria de la vida. El principio de **necesidad** justifica sólo las medidas de violencia militar no prohibidas por el derecho internacional, **que son relevantes y proporcionadas para garantizar el pronto sometimiento del enemigo con el menor gasto posible de recursos humanos y económicos**. El principio de **humanidad** complementa y limita intrínsecamente el principio de necesidad, **al prohibir las medidas de violencia que no son necesarias** (es decir, relevantes y proporcionadas) para el logro de una ventaja militar definitiva [...]”.*

En otro orden de ideas, la Corte ha señalado, en relación con una persona que, estando bajo la custodia del Estado, presenta lesiones, lo siguiente:

*"134. [...] La jurisprudencia de este Tribunal también ha señalado que siempre que una persona es detenida en un estado de salud normal y posteriormente aparece con afectaciones a su salud, corresponde al Estado proveer una explicación creíble de esa situación. **En consecuencia, existe la presunción de considerar responsable al Estado por las lesiones que exhibe una persona que ha estado bajo la custodia de agentes estatales.** En dicho supuesto, recae en el Estado la obligación de proveer una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios adecuados [...]"*.<sup>42</sup>

De la anterior transcripción se puede concluir que si un detenido presenta lesiones existe la presunción *juris tantum* de que fue la autoridad quien las produjo, por tal motivo es necesario que la autoridad explique y anexe documentación que desvirtúe tal prueba.

Por otro lado cabe señalar que la **Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer**, también conocida como **Belem do Pará**, prohíbe todo sufrimiento físico, sexual o psicológico que sufra una mujer y que sea perpetrado o tolerado por el Estado o sus agentes<sup>43</sup>. Lo anterior obedece, según lo dicen las disposiciones preliminares de dicho tratado, por la desigualdad histórica que existe entre mujeres y hombres y porque la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana que trasciende a todos los sectores de la sociedad independientemente de cualquier circunstancia.

Cabe señalar que dicha obligación se robustece en el **artículo 6 fracciones II y VI de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia** al considerar como tipo de violencia las formas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres, y que estos tipos de violencia debe de ser prevenidos, sancionados y erradicados por las autoridades<sup>44</sup>. Por otra parte, el **artículo 13** de la misma ley, describe la

---

<sup>42</sup> Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Noviembre 26 de 2010, párrafo 134.

<sup>43</sup> Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, artículos 1, 2.c y 7.a

<sup>44</sup> Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, artículo 6 fracción II y VI:

violencia institucional como los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de las políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.

**c) Conclusiones.** En el presente caso se acreditó la dinámica de hechos expuesta por la víctima sólo en cuanto los golpes. Por tal motivo, será necesario entrar al estudio y análisis del uso de la fuerza para poder determinar si aquél estuvo justificado o injustificado.

Este organismo se percata de que la víctima fue menoscabada cuando la policía ministerial se encontraba ejerciendo su custodia. En el acápite anterior se hizo alusión a la relación de sujeción especial, implicando entonces que la autoridad, además de tener a su cargo la custodia de la víctima, era garante de todos sus demás derechos, por eso la autoridad debió explicar y justificar convincentemente las lesiones referidas para que fuera exculpada de las mismas, obligación que no fue vista durante la integración del expediente.

El principio de excepcionalidad en el uso de la fuerza precisa que se deben de agotar todos los demás medios para evitar que se ponga en riesgo algún bien jurídico tutelado, v.g. la vida e integridad de cualquier persona o la sustracción de la acción de la justicia, empero por el hecho de que la víctima estuvo custodiada por los elementos ministeriales y, por ende, supeditada su voluntad a la de la autoridad, es inverosímil llegar a creer que alguna persona, incluyendo agentes policiales, pudo haber corrido el riesgo de sufrir menoscabo en su integridad o, peor aún, riesgo de perder la vida; y a pesar de que así hubiera sido, había otros medios, como simples apercibimientos, que tendrían que haberse agotado y fracasado antes del empleo del uso de la fuerza, por eso esta comisión considera injustificado el uso de la fuerza en el presente caso.

Ahora bien, esta comisión, como tuvo por acreditado la dinámica de hechos en cuanto los golpes, y no se pudo justificar el uso de la fuerza, tiene por hecho, tal y como ya se refirió en el apartado del marco normativo, que la **Sra. \*\*\*\*\*** sufrió de violencia institucional al ser agredida a golpes por la **Policía Ministerial de la Agencia Estatal de Investigaciones** con fines de obtener ella una confesión.

---

*"Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son: [...] II. La violencia física.- Es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas, o ambas; [...]II. La violencia física.- Es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas, o ambas."*

Determinado lo anterior, esta comisión analizará los elementos de la tortura y/o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En relación con la intencionalidad, este organismo considera claro que los actos fueron con dolo y no como consecuencia de la fortuna o del error. En cuanto a la finalidad, esta comisión considera que el menoscabo en la integridad de la víctima, al ser dolosa la acción, fue con la intención de que confesara su participación en el alegado robo de dinero en efectivo del Sr. \*\*\*\*\*.

En cuanto a la severidad, esta institución considera que, aunado a las consecuencias que lleva la incomunicación prolongada por la demora en la puesta a disposición<sup>45</sup> y las consecuencias de sufrir una detención ilícita<sup>46</sup>, la

---

<sup>45</sup> Este criterio es coincidente con lo que ha establecido el Poder Judicial de la Federación, v.g:

**“Tipo de documento: Tesis aislada  
Novena época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo: XXIX, Enero de 2009  
Página: 2684**

*DETENCIÓN PROLONGADA. EL HECHO DE QUE LOS AGENTES CAPTORES RETENGAN AL INDICIADO POR MÁS TIEMPO DEL QUE RESULTA RACIONALMENTE NECESARIO, EN ATENCIÓN A LAS CIRCUNSTANCIAS PROPIAS DE LA DISTANCIA Y LA DISPONIBILIDAD DEL TRASLADO GENERA PRESUNCIÓN FUNDADA DE INCOMUNICACIÓN Y AFECTACIÓN PSÍQUICA DEL INculpADO Y, POR ENDE, SU CONFESIÓN MINISTERIAL CARECE DE VALIDEZ. El cuarto párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Tal previsión implica la existencia de una garantía de inmediatez en la presentación del detenido ante la autoridad tan pronto sea posible, en aras de darle seguridad legal acerca de su situación particular. En ese tenor, si existen datos fehacientes de que los agentes captores retuvieron al indiciado por más tiempo del que resultaba racionalmente necesario, en atención a las circunstancias propias de distancia y disponibilidad de traslado, resulta inconcuso que dicha circunstancia genera presunción fundada de que el detenido estuvo incomunicado y que en ese periodo sufrió afectación psíquica por el estado de incertidumbre en cuanto a su seguridad jurídica y personal, dada la retención prolongada a la que estuvo sometido, lo que trasciende al estado psico-anímico en el que rindió su declaración ministerial y, por ende, su confesión respecto de los hechos que se le imputan carecerá de validez.*

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.

*Amparo directo 318/2005. 22 de febrero de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto Díaz Ortiz. Secretario: Salomón Zenteno Urbina.*

*Amparo directo 397/2007. 20 de diciembre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Arteaga Álvarez. Secretario: José Martín Lázaro Vázquez.*

*Amparo directo 150/2008. 23 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Artemio Maldonado Cruz, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: \*\*\*\*\*”.*

**Sra. \*\*\*\*\*** sufrió de tratos crueles, inhumanos y degradantes al ser sometida a golpes con el fin de obtener de ella una confesión, lo que además implicó violencia institucional en su contra; violando así la **fracción II del apartado A del artículo 20** constitucional; artículos **5.1 y 5.2** de la **Convención Americana sobre Derechos Humanos**; artículo **7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos**, artículos **2 y 5** de la **Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura**; artículos **1.1 y 16.1** de la **Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Cruels, Inhumanos o Degradantes**; artículos **1, 2.c y 7.a** de la **Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer**, artículos **6 fracciones II y VI y 13** de la **Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia**; en relación con los **artículos 1 y 133** de la **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**.

**Cuarta.** Esta **Comisión Estatal** advierte que, en el ejercicio de sus funciones, los elementos de la **Policía Ministerial de la Agencia Estatal de Investigaciones**, servidores públicos **\*\*\*\*\*y \*\*\*\*\*<sup>47</sup>**, cometieron diversas irregularidades que se redujeron en una **Prestación indebida del servicio público** al haberse comprobado la conculcación a los **derechos a la libertad y seguridad personales por detención ilícita y arbitraria, integridad personal por tratos crueles, inhumanos y degradantes y a la seguridad jurídica de la víctima**.

---

Por otro lado la Corte Interamericana se ha pronunciado en el mismo sentido:

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007, párrafo 171.

*"171. Asimismo, la Corte ha establecido que el 'aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva son, por sí mismos, tratamientos crueles e inhumanos, lesivos de la integridad psíquica y moral de la persona y del derecho al respeto de la dignidad inherente al ser humano [...]".*

<sup>46</sup> Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Juan Humberto Sánchez vs Honduras. Fondo. Junio 7 de 2003, párrafo 98.

*"98. [...] por la ilegalidad de la detención, basta que haya sido un breve tiempo para que se configure dentro de los estándares del derecho internacional de los derechos humanos una conculcación a su integridad psíquica y moral. Asimismo, la Corte ha dicho que cuando se presentan dichas circunstancias se permite inferir, aún cuando no mediaran otras evidencias al respecto, que el trato que la víctima recibió durante su incomunicación fue inhumano, degradante y agresivo en extremo."*

<sup>47</sup> En el último párrafo del informe que rindió **Miguel Gallegos Handal, Detective "A" Responsable del Tercer Grupo de Delitos Patrimoniales de la Agencia Estatal de Investigaciones**, al **Agente del Ministerio Público Investigador Especializado en Robos en General Número Dos** el 26-veintiséis de julio de 2012-dos mil doce, se asentó:

*"Agentes a cargo \*\*\*\*\*y \*\*\*\*\* al mando del suscrito."*

Las conductas de los servidores actualizan<sup>48</sup> las **fracciones I, V, XXII, LV, LVIII y LX del artículo 50** de la **Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios de Nuevo León**, ya que omitieron cumplir con la máxima diligencia el servicio que les fue encomendado, ejecutando actos arbitrarios en detrimento del respeto a los derechos humanos.

Asimismo, dichos actos y omisiones no encuadran en los principios que rigen la función policial, los cuales son la legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los Derechos humanos reconocidos en la Constitución, últimos que, según el artículo 1 constitucional, son los reconocidos en la Carta Magna y en los tratados internacionales que se deberán respetar, proteger y garantizar conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad<sup>49</sup>.

---

<sup>48</sup> Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios de Nuevo León, artículo 50, fracciones I, V, XXII, LV, LVIII y LX.

*“Artículo 50 Todo servidor público incurrirá en responsabilidad administrativa cuando incumpla con las siguientes obligaciones generales de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones: I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión; [...] V. Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación con motivo de éste; [...] XXII. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público; [...] LV. Abstenerse de ejecutar cualquier acto arbitrario y atentatorio a los derechos garantizados tanto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como por la Constitución Local, debiendo conducirse siempre con apego al orden jurídico y respeto a los derechos humanos; [...] LVIII. Abstenerse en todo momento y bajo cualquier circunstancia de infligir, tolerar o permitir actos de tortura u otros tratos de sanciones crueles, inhumanos o degradantes, aún cuando se trate de una orden superior o se argumenten circunstancias especiales, tales como amenaza a la seguridad pública, urgencia de las investigaciones o cualquier otra; al conocimiento de ello, deberá denunciarlo inmediatamente ante la autoridad competente; [...] LX. Observar en las funciones de seguridad pública, tránsito, administración y procuración de justicia, el cuidado de la vida e integridad física de las personas detenidas en tanto se ponen a disposición de la autoridad competente, así como atender con la diligencia encomendada, en operativos de coordinación con otras autoridades, y brindarles en su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda; [...]”.*

<sup>49</sup> Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 21 y 1.

*“Artículo 21º [...]La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.”.*

*“Artículo 1º.En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta institución establece.  
[...]*

**Quinta.** Una de las consecuencias de las violaciones a los derechos humanos es la obligación de reparar los daños que ocasionaron, ello conforme a las disposiciones internacionales en materia de derechos humanos, así como en la normativa nacional y local.

En un Estado de Derecho el gobernado debe tener la seguridad jurídica de que, en caso de sufrir una violación a los derechos humanos que tenga como consecuencia una afectación, material o inmaterial, pueda reclamarla a la autoridad.

Las recomendaciones que emiten los organismos públicos de derechos humanos, tienen como objetivo buscar que se tomen medidas para la efectiva restitución de los afectados en sus derechos fundamentales y, en su caso, la reparación de daños y perjuicios que se hubiesen ocasionado<sup>50</sup>.

El **artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, establece la obligación de las autoridades de reparar el daño en materia de derechos humanos. En su párrafo tercero menciona:

*“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y **reparar** las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”*

Asimismo, el **artículo 113** del citado ordenamiento jurídico<sup>51</sup>, ha recogido de manera expresa como garantía individual la obligación del Estado de

---

*Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”*

<sup>50</sup> Ley que crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos, art. 45.

*“Una vez concluida la investigación dirigida por el Visitador, éste formulará un proyecto de recomendación [...] a fin de determinar si las autoridades y servidores públicos contra los cuales se han presentado las quejas, han violado los derechos humanos de los afectados, al haber incurrido en actos u omisiones ilegales, irrazonables, injustos, inadecuados o erróneos, o hubiesen dejado sin respuesta las solicitudes presentadas por los interesados durante un período que exceda notoriamente los plazos fijados por las leyes. En dicho proyecto se señalarán las medidas que deban tomarse **para la efectiva restitución de los afectados en sus derechos fundamentales** y, en su caso, **la reparación de daños y perjuicios que se hubiesen ocasionado** [...]”.*

<sup>51</sup> Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 113:

reparar a los particulares por los daños o lesiones que éstos sufran con motivo de la actuación administrativa irregular de los servidores públicos. Una actuación administrativa irregular, como en la observación anterior se señaló, es actuar sin apego al orden jurídico y al respeto de los derechos humanos.

Por otro lado, la jurisprudencia de la **Corte Interamericana** ha establecido qué se entiende por reparación, al señalar:

*“41. En primer lugar, resulta útil precisar el vocabulario empleado. La reparación es el término genérico que **comprende las diferentes formas cómo un Estado puede hacer frente a la responsabilidad internacional en que ha incurrido**. Los modos específicos de reparar varían según la lesión producida [...]”<sup>52</sup>*

*“224. La **reparación del daño requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in integrum)**, que consiste en el restablecimiento de la situación anterior. **De no ser esto posible**, como en el presente caso, [...] **determinar las medidas que garanticen los derechos conculcados, eviten nuevas violaciones y reparen las consecuencias que las infracciones produjeron** [...] El Estado obligado no puede invocar disposiciones de derecho interno para modificar o incumplir la obligación de reparar. [...]*

*225. A través de las reparaciones, **se procura que cesen los efectos de las violaciones perpetradas. Su naturaleza [...] dependen de las características de las violaciones cometidas, del bien jurídico afectado y el daño material e inmaterial ocasionados.** [...]”<sup>53</sup>*

La reparación, como se desprende de las anteriores citas, tiene la finalidad de promover la justicia y remediar las violaciones a derechos humanos. En el caso que nos ocupa, es imposible devolver las cosas al estado en que se

---

*“Artículo 113. Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos, determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones, además de las que señalen las leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones a que se refiere la fracción III del artículo 109, pero que no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados. **La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes**”.*

<sup>52</sup> Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina. Sentencia de 27 de agosto de 1998. Reparaciones y Costas. Párrafo 41.

<sup>53</sup> Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Tibi Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Septiembre 7 de 2004, párrafos 224 y 225.

encontraban antes de que se violaran los derechos humanos de la víctima. Por eso es necesario buscar una diversa forma de reparación que, la **Corte Interamericana** y los **Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones**, han señalado las de: indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.<sup>54</sup> Sin implicar que sólo estas medidas podrá recomendar este organismo, se considera necesario ahondar en lo siguiente:

## 1. Indemnización

Los **Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones**, establecen en su **apartado 20**, tal y como ya se refirió que la Corte señala, que la indemnización variará dependiendo de la circunstancias y consecuencias de las violaciones<sup>55</sup>.

## 2. Medidas de satisfacción.

Los **Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos**

---

<sup>54</sup> O.N.U. Asamblea General. Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. A/RES/60/147. Diciembre 16 de 2005, principio 18.

*"18. Conforme al derecho interno y al derecho internacional, y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso, se debería dar a las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, una reparación plena y efectiva, según se indica en los principios 19 a 23, en las formas siguientes: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición."*

<sup>55</sup> O.N.U. Asamblea General. Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. A/RES/60/147. Diciembre 16 de 2005, principio 20.

*"20. La indemnización ha de concederse, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o de violaciones graves del derecho internacional humanitario, tales como los siguientes: a) El daño físico o mental; b) La pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales; c) Los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante; d) Los perjuicios morales; e) Los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos y servicios psicológicos y sociales."*

**y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones**, establecen en su **apartado 22 f)** la aplicación de medidas eficaces para conseguir que no continúen las violaciones, así como las sanciones judiciales y administrativas a los responsables de las violaciones, como medidas para satisfacer las violaciones de derechos humanos<sup>56</sup>.

La **Corte Interamericana de Derechos Humanos** ha dispuesto que, de acuerdo con la normativa disciplinaria pertinente, el Estado debe examinar las eventuales irregularidades procesales e investigativas relacionadas con los casos concretos<sup>57</sup>, como son en el particular las violaciones a derechos humanos de la **Sra. \*\*\*\*\***.

### **3. Medidas de no repetición.**

Los **Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones**, enuncian en su **apartado 23** las medidas de no repetición que son todas aquellas garantías que permiten, en lo posible, prevenir que se vuelvan a cometer violaciones similares en un futuro. Estas medidas pueden incluir reformas legislativas, medidas educativas y de capacitación, mecanismos de vigilancia y supervisión, entre otros.<sup>58</sup>

En razón de todo lo antes expuesto, al haber quedado demostrado con las evidencias relacionadas y debidamente valoradas, conforme a lo establecido en los **artículos 41 y 42** de la **Ley que crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos**<sup>59</sup>, que se cometieron violaciones a los derechos humanos

---

<sup>56</sup> O.N.U. Asamblea General. Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. A/RES/60/147. Diciembre 16 de 2005, principio 22.

<sup>57</sup> Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Familia Barrios Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Noviembre 24 de 2011, párrafo 325.

<sup>58</sup> O.N.U. Asamblea General. Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. A/RES/60/147. Diciembre 16 de 2005, principio 23 b) y e).

<sup>59</sup> Ley que crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos, artículos 41 y 42.

*“Artículo 41.- Las pruebas que se presenten, tanto por los interesados como por las autoridades o servidores públicos a los que se imputen las violaciones, o bien que la Comisión requiera y recabe de oficio, serán valoradas en su conjunto por el Visitador, de acuerdo con los principios de la lógica y de la experiencia, a fin de que puedan producir convicción sobre los hechos denunciados o reclamados.*

de la **Sra. \*\*\*\*\*** por parte de los elementos anteriormente señalados **de la Policía Ministerial de la Agencia Estatal de Investigaciones, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado**, esta **Comisión Estatal de Derechos Humanos** se permite formular las siguientes:

## V. RECOMENDACIONES

### Al Procurador General de Justicia del Estado:

**Primera.** Se repare el daño a la **Sra. \*\*\*\*\*** por las violaciones a derechos humanos que sufrió con base y de acuerdo a los estándares internacionales señalados en la presente recomendación, considerando que esta resolución constituye un elemento de las reparaciones a las que tiene derecho.

**Segunda.** Instruya al **Órgano de Control Interno** de la dependencia a su cargo, a efecto de que se inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos **\*\*\*\*\*y \*\*\*\*\***, al haber incurrido respectivamente en la violación a lo dispuesto en las **fracciones I, V, XXII, LV, LVIII y LX del artículo 50 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León**, pues, en los términos expresados en el capítulo de observaciones de esta resolución, **violaron los derechos a la libertad y seguridad personales por detención ilícita y arbitraria, integridad personal por tratos crueles, inhumanos y degradantes y seguridad jurídica de la Sra. \*\*\*\*\***.

**Tercera.** De conformidad con **los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25 de la Local y 1, 2 y 3 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado**, se inicie por los hechos referidos una averiguación previa por parte del **Agente del Ministerio Público Especializado del Fuero Común para Delitos Electorales y de Servidores Públicos**, en donde se garantice el derecho al debido proceso a las partes involucradas.

**Cuarta.** Se le brinde al afectado la atención médica y psicológica que requiera, en relación con las violaciones a sus derechos a la integridad y seguridad personales.

**Quinta.** Con el fin de desarrollar la profesionalización, se brinde capacitación en materia de derechos humanos, en especial sobre el derecho a la integridad y el debido uso de la fuerza pública, incluyéndose los temas

---

*Artículo 42.- Las conclusiones, que serán la base de las recomendaciones, estarán fundamentadas, exclusivamente en la documentación y pruebas que obren en el expediente."*

relativos: a la conducta de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, al empleo de la fuerza y la protección de las personas sometidas a detención o prisión; lo anterior se deberá aplicar a todo el personal operativo de la **Agencia Estatal de Investigaciones**.

De conformidad con el **artículo 46 de la Ley que crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León**, se hace de su conocimiento que una vez recibida la presente Recomendación, dispone del término de **10-diez días hábiles**, contados a partir del siguiente a su notificación, a fin de informar si se acepta o no la misma. En el entendido de que, **de no ser aceptada o cumplida la recomendación, deberá fundar, motivar y hacer pública su negativa**.

Quedando este organismo en la facultad de solicitar al **H. Congreso del Estado**, que llame a esa autoridad a su digno cargo, para que comparezca ante ese órgano legislativo, a efecto de que explique el motivo de su negativa o incumplimiento, además de que se hará pública la misma.

En caso de ser aceptada, dispondrá de un plazo de **10-diez días adicionales**, contados a partir del siguiente a que se haga del conocimiento de este organismo la aceptación, a fin de remitir las pruebas correspondientes de que se ha cumplido con lo recomendado.

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los **artículos 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 87 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 3, 6 fracciones I, II, IV, 15 fracción VII, 45, 46 de la Ley que crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos; y 12, 13, 14, 15, 90, 91, 93 de su Reglamento Interno**. Notifíquese. Así lo resuelve y firma la **C. Lic. Minerva E. Martínez Garza, Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León. Conste.**

L'JHCD/L'SAMS